

**EL CONCEPTO DE DIGNIDAD HUMANA DE NIÑOS, NIÑAS Y
ADOLESCENTES A LA LUZ DE LA JURISPRUDENCIA COLOMBIANA**

SEBASTIÁN VERANO CIFUENTES

Tutor principal

JAIME ALBERTO ANGEL ÁLVAREZ

Filósofo y politólogo (PhD)

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA

FACULTAD DE BELLAS ARTES Y HUMANIDADES

MAESTRÍA EN FILOSOFIA

2019

Dedicatoria.

Este trabajo es en honor a mis padres, a mi hermana Carolina, Margarita Cifuentes y Alfonso Cifuentes quienes desde siempre me han apoyado para ser un profesional idóneo para los retos que enfrenta Colombia y el mundo.

Agradecimientos.

Infinidad de agradecimientos para todos los docentes que conocí en este proceso, que nos ayudó a esclarecer tantos conocimientos de la filosofía política. Agradecimientos a los directivos de la maestría y a los compañeros con los que compartimos cada ocho días de seminarios tan ricos, desde siempre creando los debates que nos dejaban cada vez mejores preguntas por responder.

Resumen

El presente ensayo tiene el objetivo de hacer un análisis de la construcción del concepto de dignidad humana en los niños, niñas y adolescentes enfocado en la jurisprudencia colombiana teniendo en cuenta el paso de estos de objetos de protección a sujetos de derechos con el fin de abordar su comportamiento como concepto dentro del universo jurídico en miras de la garantía de sus derechos y protección. Para cumplir con ello, se parte de un análisis histórico y conceptual mostrando una reflexión del concepto de dignidad a través de una contrastación /comparación desde una mirada cristiana y kantiana. De manera seguida se expone elementos históricos, donde se parte de la Convención de los Derechos de los Niños y la Ley 1098 "Código de la Infancia y Adolescencia" sosteniendo la importancia que tiene la educación dentro del sistema colombiano como herramienta para la formación de ciudadanos basados en derechos. Lo anterior corresponde a un enfoque descriptivo-analítico desde la metodología histórica, crítica y social, consistente en observar una realidad: la dignidad en niños, niñas y adolescentes. El análisis de la jurisprudencia de la situación de la dignidad de los niños y adolescentes en Colombia permite evidenciar que existe un cambio paulatino en el paradigma, pretendiendo cambios enfocados en la garantía de los derechos; lamentablemente, esta garantía en un país desigual genera limitaciones, lo que vulnera los derechos.

Palabras clave. Dignidad humana, niño, adolescente, educación, derechos.

Abstract

This present essay has the objective of making an analysis of the construction of the concept of human dignity in children and adolescents focused on Colombian jurisprudence considering the passage of these from objects of protection to subjects of rights in order to address their behavior as concept within the legal universe with a view to guaranteeing their rights and protection. To accomplish this, we start from a historical and conceptual analysis showing a reflection of the concept of dignity through a comparison from a Christian and Kantian perspective. Historical elements are exposed below, which starts with the Convention on the Rights of Children and Law 1098 "Code of Children and Adolescents" and the importance of education as a tool for the training of rights-based citizens. The above corresponds to a descriptive-analytical approach from the historical, critical and social methodology, consisting of observing a reality: dignity in children and adolescents. The analysis of the jurisprudence of the situation of the dignity of children and adolescents in Colombia allows us to show that there is a gradual change in the paradigm, seeking changes focused on the guarantee of rights; Unfortunately, this guarantee in an unequal country creates limitations, which violates rights.

Keywords. Human dignity, child, adolescent, education, rights.

Tabla de Contenido

| | |
|--|----|
| INTRODUCCIÓN | 7 |
| 1. ORIGEN E HISTORIA DEL CONCEPTO DE DIGNIDAD HUMANA..... | 14 |
| 1.1. CONCEPTO CRISTIANO DE DIGNIDAD HUMANA | 19 |
| 1.2. CONCEPTO KANTIANO DE DIGNIDAD HUMANA | 22 |
| 1.3. ALCANCES DEL CONCEPTO DE DIGNIDAD KANTIANA | 27 |
| 2. SUJETOS DE DERECHO U OBJETOS DE PROTECCIÓN: LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ANTE LA JURISPRUDENCIA COLOMBIANA. | 29 |
| 2.1. QUÉ SE ENTIENDE POR DIGNIDAD HUMANA DESDE LOS TEXTOS LEGALES NACIONALES E INTERNACIONALES | 33 |
| 2.2. CONCEPTO DE DIGNIDAD DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A LA LUZ DE LA JURISPRUDENCIA COLOMBIANA Y ALGUNAS SENTENCIAS DE LA CORTE... .. | 46 |
| 3. ANÁLISIS DEL CONCEPTO DE DIGNIDAD EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES: LIMITACIONES DE APLICABILIDAD Y EFECTIVIDAD PRÁCTICA, EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA | 52 |
| CONCLUSIONES | 64 |
| Bibliografía | 71 |

INTRODUCCIÓN

La reflexión en torno a la dignidad humana de niños, niñas y adolescentes parte desde una mirada histórica y social de los cambios conceptuales asociados al reconocimiento del ser como portador de derechos. Si bien, el fundamento histórico cristiano ha incidido de manera notable en la configuración y presentación de la dignidad, como principio general, no es hasta la Declaración Universal de los Derechos Humanos que empieza a robustecerse como el fundamento formativo en la consolidación de los Estados sociales de derecho. Lo anterior da paso al reconocimiento del ciudadano como un individuo dentro de una esfera social dotado de autonomía para la toma de decisiones y de un valor intrínseco de su ser, basado en la capacidad moral y de razonamiento: la dignidad.

La dignidad es un concepto de enormes abstracciones y configuraciones, su formulación dotó al hombre de un poder de gobernanza, determinando nuevas esferas de interacción socio históricas. Este paso se reforzó en ciertos grupos humanos, los cuales eran incompatibles con la realidad del concepto a nivel práctico social, como lo eran las mujeres; los negros; los niños, niñas y adolescentes. Estos grupos no tenían una autonomía y la toma de decisiones estaba subyugada convirtiéndoles en objetos de protección, en el mejor de los casos.

De manera histórica y cultural, el niño, niña y adolescente eran concebidos en una ambivalencia en sus procesos de configuración jurídica y social, primando las decisiones de los padres sobre la vida de estos, ya que se argumentaba la falta de autonomía y problemas en la toma de decisiones; por lo cual no tenían voz y estaban subordinados al poder de un adulto. Además, en

diferentes culturas, eran considerados como objeto – propiedad, sin valores, sin derechos e integración al género humano. Los cambios en torno a los paradigmas jurídicos y sociales llevaron a un replanteamiento de su identidad, primando con ello la importancia del reconocimiento como ser humano dotado de una dignidad. Cabe mencionar, como lo establece Cabrera (2017, p. 91):

El origen del concepto de dignidad es paralelo al de *pater familiae*. Es el *pater familiae* quien, de por sí, tiene dignidad. Por tanto, los niños y niñas carecen de ella y están subordinados al poder del adulto. Frente al adulto, son un objeto-cosa propiedad del adulto.

Por lo cual, pensar que los niños, niñas y adolescentes son dotados de dignidad a partir de que hacen parte del género humano es entrar en un error, desconociendo el origen mismo del término como los acervos culturales que configuran el concepto dentro de la sociedad occidental. Lo anterior se materializó en la Convención de los Derechos del Niño, que retomaba la Declaración de los Derechos Humanos, con sus principios, valores y problemas conceptuales. De esta manera se exhibe una reconceptualización del niño, niña y adolescente de forma dinámica, en la cual se identifican los valores constitutivos, los intereses y la cultura como factores de cambio en la concepción propia.

En Colombia, la adopción de la dignidad humana cumple un papel de suma importancia, al comportarse como valor, principio y derecho establecido en la Constitución Nacional de 1991 (Velasco, 2013). De esta manera, es un elemento fundante del Estado de Derecho, lo que hace responsable al Estado de velar por su cumplimiento y la no violación de este. Por su variedad semántica, la dignidad no posee una definición clara dentro de la legislación nacional como internacional, recurriendo con ello a un supuesto de tipo teórico. La pronunciación de este ha conformado la evaluación del concepto en torno a la libertad, la igualdad y la seguridad, entre otros

valores. Claramente, como otras constituciones de países que conforman las Naciones Unidas, existe una recurrencia a generar referencias al término dignidad y digno sin un grado de profundidad en la comprensión y en la consolidación.

Dentro del Estado social de derecho, la protección de la persona humana es un elemento fundamental, haciendo hincapié en la conformación del pensamiento en aquellos grupos humanos que han sido discriminados o subordinados históricamente. La consolidación de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos llevó a tratarlos como ciudadanos, fomentando con ello un reconocimiento en torno a la dignidad humana y a los derechos que estos poseen. Lo anterior se materializó por medio de la Ley 1098 de 2006 reconocida como el Código de Infancia y Adolescencia, la cual tiene el objetivo de “garantizar a los niños, niñas y adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna” (Código de la Infancia y la Adolescencia, 2006, p. 1). Su configuración implicó el desarrollo de herramientas y órganos de control, que se establezcan como el mecanismo idóneo para el cumplimiento de los postulados nacionales e internacionales.

El desarrollo del Código enmarcado en la Convención y la Declaración compromete al país a la generación de planes, programas y políticas orientadas a la gestión y protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Uno de los organismos habilitados para ello es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), sustentado en prestar ayuda en temas de protección y reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos. Lamentablemente, la puesta en escena de la reglamentación en torno a la dignidad humana para este grupo humano posee enormes problemas, dadas las condiciones sociales, económicas y de violencia que presenta

el país; lo que se ve reflejado en la alta tasa de mortalidad infantil de menores de un año y los altos índices de pobreza, que conlleva al fomento de una vida indigna. Además, el acceso a la educación, aunque posee una gran cobertura y gratuidad, no cumple con los estándares necesarios para el desarrollo integral, concurriendo a la deficiencia del cumplimiento de las necesidades humanas, sin mencionar que el enfoque educativo orientado a los derechos humanos es limitado.

De acuerdo con los planteamientos de la Convención de los Derechos del Niño adoptados en 1989 en torno a los Artículos 28¹ y 29², la educación es el mecanismo idóneo para la consolidación de la dignidad humana (UNICEF, 2006); por lo que su desarrollo en los Estados sociales de derecho debe ser una prioridad focalizada y establecida en términos de calidad y de desarrollo humano, donde prime el respeto por los derechos humanos. Como lo menciona el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, la educación orientada a los derechos humanos

¹ ARTÍCULO 28 :1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño a la educación y, a fin de que se pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán en particular: a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y gratuita para todos; b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de la enseñanza secundaria, incluida la enseñanza general y profesional, hacer que todos los niños dispongan de ella y tengan acceso a ella y adoptar medidas apropiadas tales como la implantación de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de necesidad; c) Hacer la enseñanza superior accesible a todos, sobre la base de la capacidad, por cuantos medios sean apropiados; d) Hacer que todos los niños dispongan de información y orientación en cuestiones educacionales y profesionales y tengan acceso a ellas; e) Adoptar medidas para fomentar la asistencia regular a las escuelas y reducir las tasas de deserción escolar. 2. Los Estados Partes adoptarán cuantas medidas sean adecuadas para velar por que la disciplina escolar se administre de modo compatible con la dignidad humana del niño y de conformidad con la presente Convención. 3. Los Estados Partes fomentarán y alentarán la cooperación internacional en cuestiones de educación, en particular a fin de contribuir a eliminar la ignorancia y el analfabetismo en todo el mundo y de facilitar el acceso a los conocimientos técnicos y a los métodos modernos de enseñanza. A este respecto, se tendrán especialmente en cuenta las necesidades de los países en desarrollo. (UNICEF, 2006, p. 24)

² ARTÍCULO 29: 1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a: a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus posibilidades; b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas; c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país de que sea originario y de las civilizaciones distintas de la suya; d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena; e) Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural. 2. Nada de lo dispuesto en el presente artículo o en el artículo 28 se interpretará como una restricción de la libertad de los particulares y de las entidades para establecer y dirigir instituciones de enseñanza, a condición de que se respeten los principios enunciados en el párrafo 1 del presente artículo y de que la educación impartida en tales instituciones se a

es la herramienta principal para “aprender y tomar conciencia acerca de los valores y principios que han adquirido para regular de mejor forma las relaciones del Estado y la sociedad” (Ministerio de Educación Nacional, 2009, p. 8). En torno a ello, Colombia, en su Constitución Política de 1991, en su Artículo 67³, establece y dispone que la educación será elemento fundamental en la formación del colombiano y estará orientada al respecto de los derechos humanos, a la paz y la democracia sin importar las diversidad lingüística, racial, religiosa y étnica.

El Ministerio de Educación Nacional como instancia mayor en temática educativa instaura el PLANEDH (Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos) con el fin de dar cumplimiento al reglamento y asumiendo los compromisos de orden jurídico y político que tiene el país con el fin de garantizar un Estado social de derecho adscrito a instrumentos internacionales sobre derechos humanos como lo es la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Convención de los Derechos del Niño. Lo anterior se reglamenta a través de la Ley 115 de 1994 y normativa sucesora que da los planteamientos para la ejecución partiendo de la identificación contextualizada de las problemáticas y de la realidad de la religión en torno a temáticas sociales, políticas y económicas (Ley General de Educación, 1994). A partir de ello, el presente texto tiene como objetivo generar un análisis deductivo del concepto de dignidad humana de los niños, niñas y

³ ARTÍCULO 67: La educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura. La educación formará al colombiano en el respeto a los derechos humanos, a la paz y a la democracia; y en la práctica del trabajo y la recreación, para el mejoramiento cultural, científico, tecnológico y para la protección del ambiente. El Estado, la sociedad y la familia son responsables de la educación, que será obligatoria entre los cinco y los quince años y que comprenderá como mínimo, un año de preescolar y nueve de educación básica. La educación será gratuita en las instituciones del Estado, sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos. Corresponde al Estado regular y ejercer la suprema inspección y vigilancia de la educación con el fin de velar por su calidad, por el cumplimiento de sus fines y por la mejor formación moral, intelectual y física de los educandos; garantizar el adecuado cubrimiento del servicio y asegurar a los menores las condiciones necesarias para su acceso y permanencia en el sistema educativo. La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señalen la Constitución y la ley. (Constitución Política de Colombia, 1991)

adolescentes haciendo hincapié en los planteamientos jurídicos y al reconocimiento de la educación como modelo para el respeto y ejecución.

De esta forma, el primer capítulo corresponde al origen e historia del concepto de dignidad humana con el fin de brindar una visión general sobre la conformación teórica y reflexiva del concepto. Para ello se parte de las concepciones nacientes desde las miradas cristianas y kantianas, las cuales han tenido alcances tales de modificar y sustentar la percepción hacia el ser humano por parte de los Estados. Lo anterior identifica a la dignidad humana como un derecho que posee todo ser humano, y su establecimiento implica un respeto y un valor desde la individualidad y lo social. En este capítulo prima la mirada teórica, por lo cual se retoma la configuración semántica desde la mirada católica-cristiana y la kantiana; insertadas en la forma de concebir la dignidad por parte de los grupos humanos en diferentes contextos sociales.

El segundo capítulo se establece en torno a la identificación de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho. Se parte de una mirada histórica sobre su concepción y sus tránsitos de objetos de protección a sujetos de derecho. Para ello se presenta una revisión inductiva desde la dignidad humana en general, haciendo énfasis en las postulaciones de los textos legales a nivel internacional y nacional. Dentro del capítulo se genera una recapitulación sobre los procedimientos y acciones dentro de la jurisprudencia de la Corte Constitucional para brindar cumplimiento y desarrollo del valor, principio y derecho sustentado en la Constitución Política de 1991: la dignidad humana. En la parte final de este se postula el camino para analizar la dignidad humana en los niños, niñas y adolescentes partiendo a su vez de la Convención de los Derechos del Niño, hasta su puesta en escena en el territorio colombiano con el Código de Infancia y Adolescencia. Es importante señalar que al concebir a la dignidad como triada jurídica: valor,

principio y derecho se configura un estado de derecho de gran complejidad donde se vincula la dignidad con el derecho a la vida, la libertad, la educación y otros fundamentales nacientes de la Declaración Universal.

Finalmente, el tercer capítulo desarrolla el análisis del concepto de dignidad humana en niños, niñas y adolescentes. Para ello parte de los escenarios educativos como fundamento para la enseñanza de los derechos humanos, sustentado en las recomendaciones de organismos internacionales. Se vincula su análisis a lo expuesto en la Ley 115 de 1994 – Ley General de Educación, la Ley 1098 de 2006 – Código de Infancia y la Adolescencia y demás vinculados al Proyecto de educación en derechos humanos promulgado por la Presidencia de la República. Es importante señalar que la educación corresponde, desde esta perspectiva, al proceso y herramienta como la sociedad puede enseñar y desarrollar el concepto de dignidad humana, principalmente de los niños, niñas y adolescentes; entendiendo su evolución jurídica.

1. ORIGEN E HISTORIA DEL CONCEPTO DE DIGNIDAD HUMANA

En el presente capítulo se desarrolla una confrontación teórica sobre el concepto de dignidad humana, partiendo de una mirada general sobre el concepto etimológico de la palabra *dignidad*. Para cumplir con ello, se debe mencionar que el concepto tiene una gran cantidad de referentes en la teoría filosófica y jurídica que se han modificado a través del tiempo y que juegan un papel importante en la actualidad. Se encaminará el recorrido del texto en tres elementos fundamentales: el concepto cristiano de dignidad humana, el concepto kantiano de dignidad humana, y los alcances y límites del concepto de dignidad kantiana. Lo anterior, con el fin de abarcar las definiciones del concepto a los debates actuales sobre *dignidad humana* vinculados con la moral, los derechos humanos y el comportamiento social.

Desde un punto general, la dignidad es entendida como un reconocimiento de una persona enfocado al respeto; lo cual establece una alteridad naciente de la necesidad emocional en un contexto social. Tiene sus grandes referentes en el pensamiento jurídico filosófico, haciendo énfasis en los derechos, por una parte, y en elementos cristianos católicos, por otra parte; haciendo con ello que se establezca una problemática y distinción con temas morales y recreando paradojas de uso poco apropiado en el ámbito de la discusión (Oehling, 2015). De acuerdo con De Miguel, (2004), la palabra *dignidad* tiene su posible origen etimológico en la lengua sánscrito, partiendo de la raíz *dec*, que hace referencia a términos semánticos como conforme, conveniente o adecuado a algo. Dicha raíz fue retomada por la lengua latina, la cual hizo una unión con el sufijo *-mus*, formando con ello el vocablo *decmus*, y que luego se derivó en la palabra *dignus*, que al final se castellaniza en la palabra *digno* y en su posterior semiotización léxica en la palabra *dignidad*.

Para Valls (2005), el uso lingüístico del concepto *dignidad* está ligado a elementos históricos, por lo cual analizarlo implica más allá de conocer su etimología. Como se verá en el recorrido del texto, el concepto está ligado a una ley superior o divina, razón por la cual es conveniente identificar su construcción cristiana, y como se evolucionó hasta llegar al concepto moderno que se tiene, relacionado con la autonomía moral. Históricamente, el término no designa igualdad, por su parte implica una exclusión; aquellos seres que poseían dignidad hacían parte del grupo *aristós* o de los virtuosos que necesitaban o merecían respeto. Luego de su uso por siglos, empezó a desarrollarse una mirada más aplicada al mundo jurídico, donde el concepto de *dignidad* implicó reconocer dentro de este un enfoque social, por lo que, la dignidad implicaba reconocer a alguien a partir de elementos sociales. Dichos cambios conceptuales vincularon a la moralidad, a la libertad moral y a los derechos innatos de los seres humanos. Cabe mencionar el uso del concepto en el ámbito pragmático para designar una actividad vergonzosa y/o con comportamientos poco agradables, por lo que sale la frase “perder la dignidad”.

Como se mencionó al inicio del texto, aunque el concepto posee un origen etimológico tentativo, posee varias formas de aplicación, partiendo inicialmente de los intereses y contextos. Para Trueba (2016), el concepto de *dignidad* debe iniciar reconociendo y analizando los antecedentes griegos, ya que han afectado en la noción moderna de dignidad humana. En la Antigua Grecia, la *dignidad* hacía referencia a un estilo de vida bueno, más enfocado a la mejor forma de vida y deseable del ser humano; esto puede rastrearse en elementos poéticos en las obras de Homero, Sófocles y Píndaro. Cabe mencionar, que el concepto se construye en torno a elementos como la vida, la muerte y la condición humana; empleando con ello enseñanzas prácticas de jóvenes guerreros y elementos de exaltación sobre la actividad heroica figurada con la valentía y el honor.

Para De Miguel (2004), la dignidad es entendida desde una mirada social y política, asociado con la *maiestas*; término fuerte relacionado con la palabra *majestad* y campos semánticos similares. Desde esta mirada, se relaciona la *dignidad* con elementos que hacen referencia a la nobleza, implicando que aquello digno o que implicaba dignidad tenía la función meritoria a favor de elementos públicos. Al hacer referencia con el mérito, la *dignidad* implica un reconocimiento a partir de este, estableciendo diferencias sociales y comportamientos que, a su vez, marcaban distancias sociales por la jerarquía y formas autoritarias (Häberle, 2003). Este tipo de aplicación parte desde una mirada romana, dada su generalización y uso en dicho territorio en los primeros siglos de nuestra era.

En la Edad Media, la distinción generada en la Antigua Roma se mantuvo al punto de ser elemento característico de la nobleza; es decir, la dignidad estaba estrechamente vinculada con este grupo socioeconómico y político (Malpas & Lickiss, 2007). Desde una mirada del sistema feudal, el concepto *dignidad* tomó más fuerza para la manifestación del poder, implicando con ello la relación entre reyes y señores feudales por su distinción de acuerdo con la dignidad (Peritone & Cuminsky, 1986). A su vez, la Iglesia, como sujeto primordial de poder del medioevo, aplicó el concepto de *dignidad* para caracterizar a sus miembros, dando prioridad y más alto cargo semántico de dignidad al Papa, seguido por cardenales y obispos (De Miguel, 2004). A partir del medioevo tardío, el término se solidificó y cristalizó, lo cual implicó que la dignidad hacía referencia a los cargos públicos, como elemento externo que se suma a la esencia de la persona por lo que este hace. Esta mirada es característica en las definiciones presentes en diccionarios o en el imaginario semántico de las personas, partiendo de la filosofía estoica romana y la aparición del cristianismo.

De acuerdo con De Miguel (2004), desde una mirada más ontológica, el concepto de *dignidad* aparece retomando elementos de la filosofía estoica romana y con el inicio de un nuevo cristianismo que parte del humanismo renacentista; implicando con ello la concepción antropológica del mundo, donde se situaba al hombre mismo como el centro del universo. Esta nueva forma de pensar, centrada en el hombre, permitió que se le adjudicara una serie de comportamientos y acciones, principales orientadas a los privilegios que puede tener el hombre, no basado en la riqueza, sino en la cualidad misma de su existir y su compartir con el Dios. De esta manera, se empezó a desarrollar un nuevo concepto de *dignidad*, más próximo a los intereses de este texto; aquellos asociados con la esencia humana. Desde esta nueva mirada, el ser humano es digno a partir de su propia existencia, es decir que la dignidad está ligada a la persona (Pérez & Butanda, 2015)

Si bien, como lo menciona De Miguel (2004), los cambios históricos hicieron que el mismo concepto de *dignidad* implicara nuevas formas de ver, el pensamiento renacentista se mantuvo durante bastante tiempo, de manera internalizada, implicando con ello que la dignidad era procedente de un dios, el cual brindaba y encaminaba las obras para la dignidad humana. Aunque el autor menciona que con el renacimiento, el poder de la Iglesia en las ideas y conceptos disminuyó, fue a partir de El Barroco donde empezó a retomar nuevamente fuerza la idea naturalista de la dignidad, apareciendo con ello autores como Descartes, Pascal, Grocio, Pufendorf, Tomásio, Burlamaqui y Wolff (Pele, 2003). De esta manera, en el siglo XVIII empieza a generarse un florecimiento ontológico del concepto, permitiendo así que el mundo filosófico, principalmente por los planteamientos de personajes como Tomásio y Wolff.

En el momento que la dignidad entabla una reflexión desde la filosofía, un nuevo paradigma se establece, cambiando notablemente la vinculación y concepción a la *dignidad humana*. Uno de los autores más importantes para ello es Immanuel Kant, quien dota al concepto desde la incorporación de nuevas posiciones y retomando para ello algunos rasgos encaminados a la esencialidad del hombre. En la segunda parte del texto se brindará información más detallada sobre la *dignidad humana* para Kant, por el momento, a modo de preámbulo, es necesario mencionar que, gracias a Kant, la *dignidad* se aleja de la mercantilización, exponiendo que aquello que es digno no tiene precio alguno. Además, al hablar de *dignidad* se establece una relación de pertenencia directa con la humanidad, enfocada en la construcción de una moralidad.

A partir de los trabajos de Kant muchos autores desde la filosofía empezaron a retomar y reflexionar el término de dignidad, entre tantos resalta el trabajo de Jean Jacques Rousseau, quien expone como la dignidad es un elemento ligado a la libertad, la belleza y la personalidad (Sánchez, 2015); y, por lo tanto, establecen un orden social vinculado, principalmente con la paz. Al brindarle la idea de la libertad a la dignidad se empieza un proceso reflexivo que involucra el trabajo de aquellos enciclopedistas franceses y de eventos como la declaración de los derechos (De Miguel, 2004).

De esta manera, el concepto de *dignidad*, enfocado a la *dignidad humana*, ha cambiado considerablemente, partiendo de miradas y paradigmas sociológicos, filosóficos y teológicos. En la actualidad, el concepto puede variar de acuerdo con los contextos en los cuales se desarrolla, pero hay dos acepciones claves que muestran la diversidad y la discusión histórica. En primer lugar, se encuentra aquellos autores que para definir a la dignidad la consideran como un valor intrínseco de la persona, el cual parte de una idea de rasgos característicos del ser humano y la

mirada etnocéntrica en el ámbito del mundo reflexivo (López, 2018). Por lo tanto, esta definición corresponde a una perspectiva más cercana de la condición humana basado en el respeto a la vida y la integridad. En segundo lugar, están aquellos autores que hacen referencia a la dignidad desde un punto de vista relacional, donde puede variar de acuerdo con los sucesos en un espacio determinado (De Miguel, 2004)

A continuación, se presentará una breve reflexión en torno a dos enfoques sobre la *dignidad humana*, los cuales cumplen un papel importante en las reflexiones actuales en el mundo filosófico y jurídico del concepto. Inicialmente se presentará el del cristianismo, donde se concibe a la *dignidad* como algo innato dado por un ser superior, y estrechamente relacionada con un control de ley. En segunda medida, una exposición del concepto kantiano. Cabe mencionar, como lo establece Marín (2007), existe una gran dificultad para definir y entender la dignidad, dada su categoría pluridimensional. Ruíz (2006) ha distinguido el concepto en cuatro dimensiones fundamentales: 1) una dimensión religiosa que concibe a la dignidad por su virtud y cercanía a la semejanza e imagen de Dios; 2) una dimensión ontológica, partiendo de la racionalidad y de las consecuencias de esto en la conciencia; lo cual lo hacen un ser superior en el orden del mundo; 3) una dimensión de corte ético, que corresponde al etiquetado de la dignidad con una autonomía moral, la cual parte de la reflexión kantiana sobre los modelos de conducta; y, finalmente, 4) una dimensión social, asociada con la modernidad, donde el concepto implica un tipo de estima a partir de un comportamiento, el cual es presidido por los actos vistos como buenos o malos.

1.1. CONCEPTO CRISTIANO DE DIGNIDAD HUMANA

De acuerdo con Hervada (1994) la evocación de la dignidad humana en la actualidad está ligada con la forma como se concibe el ser, implicando con ello no solo su análisis desde los

elementos que los componen, sino como se relaciona esta en su exterioridad. Desde esta perspectiva, el hombre tiene un papel de superioridad frente a otras especies, no solo dado por la capacidad de razonamiento presente por medio del lenguaje, sino por la conexión que tiene con una entidad superior. Dicha superioridad hace parte de la dimensión intrínseca, que corresponde a la dignidad desde un punto ontológico (lo que somos), diferente a la dignidad moral (lo que hacemos) (González, 2004). Cabe mencionar que, en torno al concepto cristiano de dignidad, se han encontrado muy pocas investigaciones que traten la temática.

En la cristiandad, el concepto de *dignidad* se remonta, entonces, a una dimensión intrínseca, donde todo ser cristiano la posee. Por partir de una mirada ontológica, responde en algunos elementos en una proyección de tipo jurídico, acercando así a una dignidad moral dentro de la cristiandad y de lo que debe hacer el fiel (Hervada, 1994). Un ejemplo de ello se encuentra en el *dignitas filiorum Dei* que implica ver a la dignidad desde una interpretación de corte teológico, correspondiente a una idea medieval en torno a la tradición de derechos y deberes ligados con los hijos de Dios, los cuales responden a la característica de ser creados a imagen de su progenitor.

Para Marzoa (2000), la interpretación del concepto *dignidad* del hombre parte de la idea del reconocimiento, partiendo de una idea católica de la existencia del ser como imagen y semejanza de un Dios omnipotente, como lo relata el libro de Génesis 1, 26⁴. Este reconocer corresponde a un pensamiento moral de tipo secular, con fuerte presencia en las esferas sociales y políticas, incluso en aquellos estados laicos. Claramente, como menciona Hervada (1994), entender la dignidad partiendo de la descripción de ser hijo de Dios corresponde a un bucle sin

⁴ Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza; y tenga dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves de los cielos, y sobre las bestias, y sobre toda la tierra y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra (La Santa Biblia Reina-Valera)

respuesta sobre el verdadero sentido del concepto, por lo cual debe partirse entendiendo que “es la propia de la preeminencia del ente sobre los demás entes por su intensidad de ser, o sea, por su elevada participación en el ser” (p. 14).

Se debe partir, para analizar la *dignidad humana*, de la importancia dada dentro del cristianismo a la bipartición creada en una *dignidad cristiana*, dada al ser de forma añadida. Este tipo de dignidad recreada se basa en la relación que tiene el hombre con la naturaleza y la gracia divina, por lo cual el pueblo de Dios basa la dignidad en el acercamiento, devoción y vida bautismal a su lado (Pérez & Butanda, 2015). Dichos elementos están presentes en grandes personajes del cristianismo, como en Santo Tomás de Aquino, quien concibe a la dignidad como una unidad sustancial que abarca alma y cuerpo, implicando con ello las facultades de inteligencia y voluntad (Martínez, 2012). De esta manera, la participación de la sustancia espiritual cumple un papel importante, y el reconocimiento hacía este aparece dando a la participación en el ser el modo adecuado para ser alcanzada.

Desde la mirada cristiana, la *dignidad humana* corresponde, entonces, a un compuesto entre una unidad material, que es el cuerpo, y por el otro lado, algo inmaterial de construcción, asociada con la inmanencia ontológica, que es el alma. Como lo señala Hervada (1994, p. 15), “la dignidad de la persona es aquella eminencia de ser que proviene de su intensivo modo de ser, o sea de su índole espiritual, y que comporta el acto puro en el Ipsum esse subsistens y el deber-ser”. Esta lógica cristiana corresponde, al igual que los planteamientos de Santo Tomás, a una esencialidad; entonces, la dignidad es algo que viene en el ser, en la naturaleza humana y, por ende, no puede ser eliminada de, “La dignidad pertenece de suyo y primariamente a la esencia, no a la relación;

por eso la dignidad se posee por la esencia o naturaleza y no por las relaciones en las cuales pueda estar la persona” (Hervada, 1994, p. 17).

Al momento de concebir la dignidad como un elemento esencial, para el cristianismo implica radicar el concepto y la idea en la vocación a los fines (Buriricá, 2014). Entonces, el fin del cristiano responde a una ética y un comportamiento guiados y establecidos por las mismas escrituras divinas. Ejemplo de ello, como lo menciona Hervada (1994), es la programación del texto *dignitas filiorum Dei* proclamado por II Concilio Vaticano en la cual la exhortación a la confirmación en Cristo muestra el camino para el desarrollo pleno de la dignidad, lo cual no implica una moralidad, sino un enriquecimiento en la ontología, en el ser, que enriquece los elementos de la esencia – el alma/espíritu – sin afectar el cuerpo. Finalmente, el autor menciona que “la dignidad del cristiano procede de la participación en la naturaleza divina, según leemos en la II Epístola de San Pedro 1:4⁵.” (Hervada, 1994, p. 21), lo que implica que la naturaleza divina es la dignidad alcanzada a partir de las promesas divinas.

1.2. CONCEPTO KANTIANO DE DIGNIDAD HUMANA

En la primera parte del texto se estableció elementos históricos para reflexionar en torno al concepto de *dignidad humana*, dentro de los matices que se han establecido para comprenderla aparece un filósofo de gran trayectoria, cuyos aportes son de gran utilidad para conocer más a fondo lo que se entiende por *dignidad humana* en la modernidad. Antes de iniciar con la presentación del concepto, Immanuel Kant es un filósofo prussiano considerado como una de las columnas en la filosofía moderna, principalmente en la epistemología. Desde dicho estudio

⁵ “por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de la concupiscencia.” (La Biblia de las Américas)

filosófico, fundamento el idealismo trascendental, el cual responde al trazado de formas y conceptos desde un modelo a priori que se desarrollan a la hora de obtener una experiencia concreta (Elton, 2015).

Unas de las obras más importantes de Kant fueron aquellas insertadas en la filosofía moral, entre las que se incluye *Los fundamentos de la metafísica de las costumbres* de 1785 y *La Crítica de la razón práctica* (Elton, 2015). Dentro de estas se resalta el concepto de *imperativo categórico*, el cual se formuló como una obligación de característica incondicional u obligación ajena a la voluntad misma que poseemos y de los deseos. Este imperativo categórico se formulaba en tres grandes formas: la fórmula de la ley universal, la fórmula de la humanidad y la fórmula de la autonomía. A partir del análisis y unión de estas, Kant expresa la concepción de la *dignidad humana* en la Edad Moderna como resultado de una autonomía moral (Delgado, 2018). Dicha postura implica un rechazo a la noción de dignidad humana desde el punto de vista cristiano, ya que determina que si el hombre tiene la concepción y la importancia de la *libertad* empezará un proceso de autodeterminación que corresponde, por último, a la dignidad en sí (García, 2012). Cabe mencionar que la autonomía moral empieza con la aplicación y establecimiento de reglas propias, ajenas a nuestro propio proceso reflexivo.

Para comprender mejor el concepto de dignidad, Valls (2005) menciona la necesidad de retomar algunos elementos del texto *Fundamentación de la metafísica de las costumbre* (Kant, 1921), ya que dan el sustento para reflexionar en torno a la filosofía de la moral y determinar los elementos de la autodeterminación. Se retoman los fragmentos modificados y seleccionados por Valls, como otros que facilitan el análisis del concepto.

La necesidad práctica de obrar conforme a este principio, es decir, el deber, no se basa en sentimientos, impulsos ni inclinaciones, sino simplemente en la relación de los seres racionales entre sí, [relación] en la que la voluntad de un ser racional debe considerarse a la vez como legisladora, porque de otro modo no podría pensarse como fin en sí misma. Así pues, la razón refiere toda máxima [o regla de actuación] de la voluntad como universalmente legisladora a cualquier otra voluntad y también a toda acción respecto de sí misma, y no por algún otro motivo práctico o ventaja futura, sino por la idea de la dignidad de un ser racional que no obedece a ninguna otra ley sino a aquella que él mismo se da (Kant, 1921, citado en Valls, 2005, p.1).

Este fragmento dentro del texto es uno de los iniciales en los cuales se toma la idea de la dignidad, implicando una mirada jurídica desde sí mismo hacia los otros, lo cual implica que la dignidad va más allá de ser un reconocimiento dado por otro, es un elemento dado por sí mismo. A su vez, define lo que es lo moral, concepto importante en la filosofía kantiana para implicar la voluntad humana, la cual es la forma de conducta que adopta un individuo desde un sentido universal. Cabe mencionar que, a través del texto, Kant reflexiona sobre el término, orientando con ello a generar una ética filosófica de la moralidad, en la cual, al poseer todos los individuos una moral que implica una voluntad, todos se encuentran en una posición de igualdad y libertad; estos dos últimos elementos ligados desde una perspectiva a priori.

En el reino de los fines todo tiene o bien un precio o bien una dignidad. Lo que tiene precio puede ser reemplazado por alguna otra cosa equivalente; por el contrario, lo que se eleva sobre todo precio y no admite ningún equivalente tiene una dignidad. (Kant, 1921, citado en Valls, 2005, p.1).

En fragmentos siguientes, retoma la idea de la dignidad como elemento común y universal, pero esta vez equipara la dignidad con un elemento de valor, el cual puede ser intercambiado por otra cosa similar o de mayor valor o por el cumplimiento de necesidades. Se destaca el modo

particular que refiere a la importancia que tiene la dignidad para el ser humano, siendo tan importante y valiosa, pero dicho valor no puede ser equiparable a otros elementos. Lo anterior no solo implica una idea en el concepto de la dignidad de manera separada, sino en la evaluación de que la *dignidad humana* por ser tan valiosa implica un respeto y un comportamiento digno hacia la misma. Uniendo ambos fragmentos se tiene que la *dignidad humana* parte de la libertad con una fuerte base de la moral, implicando con ello una voluntad y un valor intrínseco no cuantificable. Lo anterior lo refuerza con fragmentos subsiguientes en el texto:

Cuanto se refiere a las inclinaciones y necesidades humanas tiene un precio de mercado; lo que, sin suponer una necesidad, se adecuó a cierto gusto, es decir, a un bienestar basado en el juego sin propósito de nuestras facultades anímicas [un objeto estético, por ejemplo, o un objeto particularmente vinculado a nuestros sentimientos], tiene un precio de afecto; pero lo que constituye la condición única bajo la cual algo puede ser fin en sí mismo no tiene meramente un valor relativo, o sea un precio, sino que tiene un valor intrínseco, es decir, dignidad (Kant, 1921, citado en Valls, 2005, p.1)..

El valor intrínseco de la dignidad implica que no puede ser cambiado o mutado, y al ser esencial de cada persona en pro de la libertad, no puede entenderse la *dignidad* a partir de la subordinación de la voluntad hacia y desde otro. Desde el ámbito social, este elemento es de gran relevancia, ya que relaciona a la dignidad con la libertad (tanto física como mental), dando con ello un rechazo a la esclavitud, al menos, desde una mirada voluntaria. Pero esta voluntad se relaciona con el ámbito racional donde nace la moral

La moralidad es la condición bajo la cual un ser racional puede ser fin en sí mismo; porque sólo por ella es posible ser miembro legislador en el reino de los fines. Así, pues, la moralidad y la humanidad, en cuanto que ésta es capaz de moralidad, es lo único que posee dignidad (Kant I. , 2010, p. 7)

la dignidad de la humanidad consiste precisamente en esa capacidad de ser legislador universal, aun cuando con la condición de estar al mismo tiempo sometido justamente a esa legislación (Kant I. , 2010, p. 7).

En los anteriores fragmentos se retoma nuevamente la importancia para comprender la *dignidad humana* desde la moralidad, partiendo que a partir de ella se adjudican leyes, como se ha reiterado, comportamentales que dan un raciocinio del saber hacer y el deber ser, iniciando con una verificación de su propia libertad y, luego, analizando la de los otros sin establecer una imposición que establezca una esclavitud. Es importante resaltar que tener la capacidad de ser legislador universal es la que encamina el desarrollo de la dignidad, sin importar que con la misma legislación se limiten libertades humanas.

Finalmente, uno de los últimos fragmentos dentro de la filosofía kantiana para hablar de la *dignidad humana* resume muy dispersamente qué entiende Kant por dignidad. El tener o contar con una *dignidad humana* es regular al ser racional a partir de su propia naturaleza humana orientada a la autonomía y libertad, reconociendo a la *dignidad* como un valor esencial intrínseco del ser humano sin equivalente alguno desde la estimación financiera.

Pero la legislación misma, que determina todo valor, debe por eso justamente tener una dignidad, es decir, un valor incondicionado, incomparable, para el cual sólo la palabra respeto da la expresión conveniente de la estimación que un ser racional debe tributarle. La autonomía es, pues, el fundamento de la dignidad de la naturaleza humana y de toda naturaleza racional (Kant I. , 2010, p. 7).

1.3. ALCANCES DEL CONCEPTO DE DIGNIDAD KANTIANA

El desarrollo del concepto de *dignidad humana* en Kant generó grandes implicaciones, incluso, como lo menciona Habermas (2010), se creó una utopía en torno a los derechos humanos, dada la conexión existente entre la moralidad de la dignidad humana y la concepción establecida en los derechos humano. Partiendo de las consideraciones de Cabrera (2017) se encuentra que el concepto de *dignidad humana* kantiana evolucionó tanto que empezó a fortalecer los elementos de la libertad individual, ideas pertenecientes del mundo occidental. Además, se retomó la idea del no valor material de la dignidad, sin importar los cambios lingüísticos sociales donde se asimila que existe la posibilidad que se genere.

Desde el punto de vista filosófico, Valls (2005) comenta que el pensamiento kantiano tuvo gran relevancia en el desarrollo del concepto *libertad* asociado con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano (1789). Claramente, existen comentarios varios, ya que dentro del concepto de *libertad* no se retoma la moralidad y la dignidad de manera explícita, por lo que se parte de varios supuestos, como el nacer en una sociedad organizada que permita que desde la libertad se desarrolle los conceptos de *autonomía* y *dignidad humana*. Además, se tiene que los planteamientos kantianos no solo transformaron las formas de pensar al ser humano, sino que se solidificaron para generar cambios a largo plazo, como lo es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre de la Organización de las Naciones Unidas (1948).

Otro elemento que fue afectado por los planteamientos kantianos fue el de *moralidad* y el de *moral*. Delgado (2018) reflexiona en torno a ello, determinando que los planteamientos de Kant son el inicio para hablar de aquella autonomía y legislación individual, vinculada de manera directa con el comportamiento del ser humano. Esta formulación implicó ver a la moral desde un punto

de vista jurídico, partiendo, entonces, de un precedente filosófico afectado y juzgado por un derecho. A lo anterior se le suma las reflexiones sobre la falacia naturalista, la falacia teológica sobre la imposición de comportamientos a priori. Cabe mencionar que la abstracción de la moral, dada su prospección a la percepción del ser humano, imperó a generar “dicotomías” sobre el deber ser y hacer: el bien y el mal; como de otros elementos que subyacen en los comportamientos sociales, donde se evidencia el uso de la moral y la moralidad más expandido.

2. SUJETOS DE DERECHO U OBJETOS DE PROTECCIÓN: LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES ANTE LA JURISPRUDENCIA COLOMBIANA.

El creciente interés en el desarrollo de la protección de los ciudadanos por parte del Estado está configurado en un ambiente ideológico enmarcado en la seguridad nacional, donde el proveedor estatal se configura en materia legislativa a partir de los movimientos asociados con los grupos marginados, como lo son los niños, niñas y adolescentes. Además, el desarrollo incorporó la realización de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, marcando con ello el inicio del derecho de la niñez y un enfoque de protección integral en los ambientes sociales para el desarrollo normal y garantizado, al igual que el bienestar (González, 2004). En el presente capítulo se realizará una presentación en torno al desarrollo de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, iniciando con una mirada global que enmarque de manera deductiva la jurisprudencia colombiana.

La Convención sobre los Derechos del Niño nace de la iniciativa de Polonia, con el fin de considerar un proceso de celebración sobre el Año Internacional del Niño. Dicha propuesta se consolidó el 20 de noviembre de 1989, donde la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó de manera unánime la transformación de los niños y niñas de objetos de protección a sujetos de derecho (Freites, 2008). A lo anterior se le suma otros elementos como: aclaraciones en torno a los derechos humanos para niños, niñas y adolescentes; conformación del Comité Internacional de Expertos enfocado en los derechos del niño, haciendo hincapié en la formación de nuevas

competencias y en la promoción y consolidación de los derechos. De acuerdo con Freitas (2008), la Convención ha ayudado a ampliar y mejorar los procesos enfocados en la protección de los niños, beneficiando a las organizaciones internacionales dedicadas a tales fines.

Dentro de la estructura de la Convención se destaca la conformación de instrumentos que cumplen el papel de generar disposiciones sobre los objetivos básicos, por lo cual se hace referencia a acciones generales en torno a las prácticas o situaciones necesarias (Convención sobre los Derechos del Niño, 1989). En la sección del preámbulo se desarrolla la vinculación con la Convención con la Carta de la ONU, dado su enfoque en derechos humanos, principalmente con los aspectos que refieren a la educación de los niños, niñas y adolescente en el marco de los ideales proclamados: “espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad”, entre otras referencias intertextuales relacionados con los antecedentes en la temática como lo son la Declaración sobre la Protección de la Mujer y el Niño en Estados de Emergencia o de Conflicto Armado, las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de Justicia de Menores y la Declaración sobre los Principios Sociales y Jurídicos relativos a la Protección y al Bienestar de los Niños (González, 2013). Cabe mencionar que, dentro del preámbulo se desarrolla el concepto de libertad en torno a los principios de dignidad y desarrollo humano, los cuales se conmutan en el progreso social; este elemento es de vital relevancia dado el tópico del presente texto, cuyo enfoque es el de la dignidad humana.

El primer elemento a tener en cuenta en la conformación de la Convención es la definición sobre el concepto *niño* dado que es el pilar medular del documento y está orientado hacia este objeto. Dentro del documento se comprende al niño como “todo ser humano menor de 18 años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad”

(Convención sobre los Derechos del Niño, 1989). De acuerdo con Cardona (2012), el reconocimiento dado a los niños en la Convención ha generado cambios significativos en torno a la consideración jurídica del niño, representando un cambio en el paradigma interpretativo dado que “el niño deja de ser considerado como un objeto de protección, para convertirse en un sujeto titular de derechos que debe ser empoderado en los mismos” (p. 49). Un sujeto de derecho es entendido desde la teoría como la conceptualización jurídica de la vida humana – biológica o social – que merece algún tipo de regulación de acuerdo con las dimensiones en las cuales se desarrolla, es decir es la adjudicación *subjetum iuris* que otorga la propiedad a un sujeto de estar dentro de las funciones del Derecho, por lo cual goza y merece beneficio y protección (Varsi, 2017).

Retomando a Cardona (2012), el reconocimiento del niño en la sociedad actual implica considerarlo como una persona en situación de vulnerabilidad, dada su debilidad o dependencia, por lo que necesita ser protegido por el Derecho, de esta manera entra en una dicotomía de tratamiento donde se comporta como objeto de protección, y dada dicha situación se le asigna un valor jurídico transformándolo en sujeto de derecho. Lo anterior se da gracias a las reflexiones dadas en torno a los nuevos movimientos sociales y a la capacidad jurídica dada, las cuales se han basado en la conformación de un Estado dotado de una constitución equitativa que adopte nuevas perspectivas de trato y protección. La Convención se forjó en este paradigma, proclamando el papel del niño como sujeto, no el desarrollo de nuevos derechos, sino la igualdad por parte del Estado en el cumplimiento de garantías para el ejercicio y respeto de los niños, niñas y adolescentes como ciudadanos; es decir, “no se trata de proteger la infancia y la adolescencia, sino proteger los Derechos de la infancia y la adolescencia” (p. 51). De acuerdo con Arias (2017, p. 132), “el niño o la niña son seres completos, dignos, son ciudadanos partícipes desde su condición de ciudadanía, su voz debe ser escuchada como se escucha la voz del adulto”, lo que corresponde con un enfoque

ético político del niño como sujeto de derechos que implica reconocer las capacidades para la decisión y el reconocimiento, eliminando las asimetrías sociales, dotando así de un proceso práctico de humanización.

Dotar al niño de derechos a partir de un reconocimiento como sujeto es comprender la posesión de una dignidad, la cual es fundamento de los derechos humanos. De acuerdo con los planteamientos de Kant (1921), la dignidad es un elemento intrínseco del ser humano, y tiene la característica de ser igual para todos los casos, sin mostrar una diferencia ni grados de actuación. Pero en el caso de la infancia, hablar de la dignidad implica otros elementos y sujetos; ya que estos no han sido humanizados al punto simétrico de los adultos, sino que se ha optado por una inferioridad dentro de la práctica política que gesta una vulnerabilidad. La titularidad para el niño de ser sujeto de derechos establece los fundamentos de la dignidad humana, y la incorporación de actores que ejerzan una protección orientada al cumplimiento y efectividad de los derechos. Lo anterior se determina a partir de las bases de la decisión y la conformación jurídica en torno a la superioridad de los intereses del niño. Es decir, se desarrolla una normativa de protección considerando a los niños como interés superior y primordial, cumpliendo con una dicotomía en torno a la armonización de la sociedad de sujeto y objeto de protección (Lázaro, 2011).

A partir de este punto, se genera una confrontación, tanto a nivel teórico como práctico, que desencadena procesos de reflexión tanto a nivel jurídico como social, no solo en la confrontación sobre si el niño es un sujeto de derechos u objeto de protección, sino en la conformación del concepto de dignidad humana en torno a ellos. De esta manera, lo que se considera como una resignificación pasa a concebirse como una evolución de la posición jurídica, donde se convierten en titulares de los derechos en torno a un interés del menor.

A continuación, se postulará algunas ideas en relación con dichos conceptos, haciendo énfasis en la jurisprudencia colombiana. Lo anterior con el fin de encaminar la discusión en torno a la dignidad de los niños, niñas y adolescente en un Estado social de derechos.

2.1. QUÉ SE ENTIENDE POR DIGNIDAD HUMANA DESDE LOS TEXTOS LEGALES NACIONALES E INTERNACIONALES

En el apartado anterior se desarrolló una reflexión teórica en torno al concepto de dignidad humana desde la mirada católica cristiana y de la mirada kantiana, ambas perspectivas han influido en la conformación de los Estados de derecho. En la presente sección se hará una reflexión sobre el concepto de dignidad humana en los textos jurídicos legales a nivel nacional como internacional. Desde una mirada sociológica, la dignidad humana se configura como objeto de protección con una funcionalidad normativa (como fundamento en el ordenamiento jurídico, como principio constitucional y como fundamento autónomo de derecho) (Carillo & Umaña, 2017). Cabe mencionar que, en la sección anterior se presentó una breve introducción sobre la dignidad, sin hacer énfasis en el concepto como tal, pero se reconoció como elemento fundamental en la conformación y desarrollo de diferentes instrumentos internacional.

Desde el Derecho positivo se comprenden al ser humano como una persona dotada de dignidad, siguiendo con ello una mirada kantiana del ser humano. El hombre posee una serie de atributos y características, donde se especifica la protección y la defensa de estos, partiendo de la generalidad naciente del siglo XX sobre los derechos humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos como otros documentos en torno a los derechos civiles, políticos, económicos y culturales de las Naciones Unidas reconocen que la dignidad es un elemento inherente a la persona, convirtiéndolo en un valor básico en la construcción de nuevos derechos, principalmente

los relacionados con la libertad y la participación. En otros instrumentos jurídicos internacionales, como lo son los Pactos de las Naciones Unidas y otros Preámbulos, se reconoce a la dignidad humana como principio fundamental, haciendo que esta se configure dentro de una naturaleza constitucional (Andorno, 1998).

La dignidad humana nace desde una mirada cristiana, pero ha evolucionado históricamente y ha adquirido relevancia en los ambientes políticos y jurídicos, haciendo relación con otros conceptos como la autonomía, la igualdad y la libertad. De esta manera, se ha configurado como un valor básico superior dentro del mundo jurídico, reconociéndose como un derecho esencial en el ámbito nacional como internacional. El primer reconocimiento al concepto se da en la antigüedad, donde el hombre se establece como sujeto de respeto y estima. Dicho reconocimiento ha conllevado múltiples generalizaciones, por lo cual se ha presentado imprecisiones e incluso construcciones vacuas en temas fundamentales y de gran relevancia social, como lo es el aborto y la eutanasia (González J. , 2007). Para Montero (2015), la dignidad humana tiene múltiples acepciones, implicando así definiciones varias que corresponde a intereses y puntos de vistas, cada estado desarrolla su propia idea de dignidad, al igual que cada documento, sin dar una claridad en torno a su definición detallada.

De acuerdo con González (2007, p. 14) “la dignidad humana aparecerá en Constituciones de Estados de culturas y concepciones de la vida muy distintas” por lo cual se ha consagrado que las Declaraciones y Tratados internacionales responden a ideologías que afectan la unicidad de conceptos. Un ejemplo de ello son algunas Constituciones del Occidente europeo, las cuales, de acuerdo con el autor, no responden y consagran de manera expresa el principio de la dignidad humana, sino que remiten al desarrollo de la personalidad humana y a la libertad, sin importar su

adhesión a la Convención y a la Declaración de los derechos humanos. Siguiendo con lo consignado por el autor se encuentra la Constitución portuguesa y la alemana (Ley fundamental de Bonn) donde se expresa de manera explícita el concepto de dignidad humana. (“Portugal es una República soberana, basada en la dignidad de la persona humana y en la voluntad popular y empeñada en la transformación de una sociedad sin clases” y en la alemana “La dignidad de la persona humana es intangible. Todos los poderes del Estado están obligados a respetarla y protegerla”) (Ley Fundamental de la República Federal de Alemania, 1949).

Dichas posturas ideológicas responden a perspectivas doctrinales, aunque su generalización corresponde a entender a la dignidad como un valor dado a la persona, dando con ello elementos de respeto e integridad, respondiendo a los Derechos Humanos. Los gobiernos hacen uso del término enfocándolo al desarrollo vital, por lo cual se restringe a la capacidad de decisión y razonamiento; esta mirada responde al concepto más de ciudadano que el de persona (Montero, 2015). De esta manera, la dignidad es dada para un grupo específico en la sociedad, dejando a los grupos oprimidos como simples objetos de protección. En la actualidad se ha hablado de la dignidad humana en niños, niñas y adolescentes implicando un reconocimiento de la dignidad como valor fundamental en la sociedad, titulando con ello responsables de aquellos que aún tienen dignidad, pero no que pueden ejercer la capacidad de decisión y razonamiento de manera plena, como los niños (García, 2012).

Por su parte, en los ordenamientos jurídicos la dignidad humana es un derecho fundamental y de vital relevancia para el Derecho, dado su papel como informador de las normas y orientador de la interpretación de estas, conduciendo a la conducta. De esta manera, la dignidad humana se configura como fundamento de la ética pública moderna, lo que la considera como el *prius* en

torno a las acciones políticas y jurídicas, y las que se deriven (García, 2012). Cuando se involucra en dichas acciones se incorpora en dos sentidos, el primero de ellos es un negativo, eliminando ofensas y humillaciones, dado su reconocimiento y el respeto hacia él, y uno positivo, donde hay un enfoque del libre desarrollo de la personalidad (Rodríguez, 2007).

Por su configuración social, el Estado es el encargado de responder en el cumplimiento de la dignidad humana, un ejemplo de ello es la Constitución griega, donde se señala “El respeto y la protección de la dignidad humana constituye una obligación primaria del Estado” (Constitución de la República de Grecia, 2008), de esta manera, la dignidad es entendida como forma de gobierno y respondiendo de forma explícita como elemento esencial de un ordenamiento jurídico. No solo en la constitución se desarrolla la dignidad humana como pilar, otras constituciones como la portuguesa o la suiza enuncia a la dignidad como *La dignité humaine doit être respectée et protégée* (La dignidad humana debe ser respetada y protegida) (Constitución Federal de la Confederación Suiza, 1999), la española proclama que el Estado debe garantizar y promover “el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida” (Constitución Española, 1978). Con estos ejemplos se configura que la dignidad, más allá del punto de vista moral se configura como pilar para el desarrollo social, incluso llegando a establecer una necesidad desde el punto de vista económico para su protección y respeto. Lo anterior implica que, aunque la dignidad humana es intrínseca, hay variables consideradas por parte del Estado para permitir que dicho “valor” no se encuentre violentado.

Siguiendo con el orden de ideas, la dignidad en otras constituciones, como la ibérica, es entendida como patrimonio de todos los seres humanos, lo cual permite verla en forma holística como definición socio política y de protección. Aunque existe un gran número de documentos

oficiales que responden a la utilización de la dignidad humana, no existe una utilización clara ni una definición concreta, solo se establece que los Estados hacen alusión a esta como una categoría especial, donde no debe ser violada. En palabras de García (2012) se configura como norma jurídico-positiva, traspasando con ello las declaraciones éticas, morales y jurídicas.

Otros documentos internacionales que retoman el concepto de dignidad humana son, de acuerdo con Gros (2003), el Concilio Vaticano II, de gran uso y expansión, donde se entiende:

El conjunto de los derechos del hombre corresponde a la sustancia de la dignidad del ser humano, entendido íntegramente y no reducido a una sola dimensión. Se refiere a la satisfacción de las necesidades esenciales del hombre, al ejercicio de sus libertades, a sus relaciones con otras personas. Pero se refiere también, siempre y dondequiera que sea, al hombre, a su plena dimensión humana (González, 1986, p.3, citado en Gros, 2003, p. 195)⁶

Desde el punto de vista de las Naciones Unidas, aparece el concepto de dignidad humana luego de la II Guerra Mundial, en el documento Carta de las Naciones Unidas, como en la Declaración de Filadelfia en torno a los objetivos de la Organización Internacional del Trabajo. Se resalta que “a afirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas” (Gross, 2003, p. 202). En esta Carta se incluye el concepto de dignidad humana, trascendiendo el Derecho Internacional positivo, gracias a la adjudicación de elementos fundamentales en torno a la dignidad de la persona humana, por lo cual se entiende como adquisidora de un sentido y una acepción jurídica (Cot y Pellet, 1991, p.13, citado en Gros, 2003, p. 202)⁷. En la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 se le da importancia a la

⁶ González, J. (1986) *La dignidad de la persona*. Madrid: Civitas.

⁷ Cot, J. & Pellet, A. (1991). *La charte des Nations Unies, Commentaire Article par Article*. Paris: Economica

dignidad, como principio ligado a la igualdad, y en contra de las acciones de discriminación “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros” (Declaración Universal de Derechos Humanos, 1948, p. 1).

Como lo menciona Gros (2003), luego de la Declaración es difícil encontrar un texto en torno a los Derechos Humanos o al Derecho positivo que no haga participe en su redacción de la dignidad; por lo cual se considera que este documento es el primordial a la hora de hablar de dignidad. Ejemplo de textos consecuentes son el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, donde se expone “estos derechos se desprenden de la dignidad inherente a la persona humana” (Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 1966). Así, la dignidad pasa de ser elemento forjador y reconocedor de otros derechos. La idea de la dignidad como inherente, se contrapone en este caso con la dignidad dada por el comportamiento de ser humano, lo que implica una distinción desde la mirada ontológica y axiológica. Otro documento similar donde la dignidad forja derechos es el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, y demás protocolos de Derechos Humanos consagrados y firmados por las Naciones Unidas.

Las convenciones también se han establecido como documentos que se rigen a partir de la Declaración, haciendo uso del concepto de dignidad humana. La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de la Discriminación Racial hace referencia a la dignidad como el principio inherente y proclamado desde el nacimiento “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos” (Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, 1965). La Convención de Tortura de 1985, la Convención sobre el Apartheid en los Deportes de 1986, la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989 y la

Convención de las Naciones Unidas sobre la Diversidad Biológica de 1992 retoman a la Declaración como elemento rector, por lo cual hacen uso del concepto de dignidad para el mismo fin. Además de las Convenciones, se desarrollan las Conferencias de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos (1968 y 1994), la Convención Interamericana para la Prevención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra la Mujer, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, el Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, las cuales también retoman la Declaración como fundamento. En particular, en relación con los derechos del niño, se expresa en el Preámbulo que la dignidad no hace referencia a la dignidad ontológica, sino a aquella de carácter axiológico, que resulta de la conducta humana.

Considerando que el niño debe estar plenamente preparado para una vida independiente en sociedad y ser educado en el espíritu de los ideales proclamados en la Carta de las Naciones Unidas y, en particular, en un espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad (Convención sobre los Derechos del Niño, 1989).

Desde los documentos oficiales de la UNESCO aparecen algunas referencias a la dignidad humana. En su constitución se establece que la dignidad es un principio democrático dotándolo de características para su conformación y desarrollo, no solo como elemento inherente.

Que la amplia difusión de la cultura y la educación de la humanidad para la justicia, la libertad y la paz son indispensables a la dignidad del hombre y constituyen un deber sagrado que todas las naciones han de cumplir con un espíritu de responsabilidad y de ayuda mutua (Convención sobre los Derechos del Niño, 1989).

Para la UNESCO se resalta a la dignidad como elemento constituyente en contra de la discriminación, de esta manera se incluye en todos los documentos que reiteran la lucha contra cualquier tipo de discriminación, como es el caso de la Convención Relativa a la Lucha Contra la Discriminación en la Esfera de la Enseñanza de 1960. Esta forma de ver a la dignidad la dota de un significado parcial, donde la presenta incompatible con los casos de discriminación. Otro elemento que hace referencia a la dignidad, pero desde una concepción diversa es la Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, ya que propone nuevas bases de la dignidad, como es el mismo genoma “El genoma humano es la base de la unidad fundamental de todos los miembros de la familia humana y de reconocimiento de su dignidad intrínseca y su diversidad. En sentido simbólico, el genoma humano es el patrimonio de la humanidad” (Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos, 1997).

En Colombia, de acuerdo con Carrillo y Umaña (2017), la dignidad humana es entendida como un pilar del Estado social de derecho desde su consolidación en la Constitución Política de 1991, donde se introdujo el concepto dado el enfoque de derechos y valores fundamentales. Cabe especificar que su configuración la coloca como base fundamental en la configuración del Estado. De acuerdo con el Artículo 1 de la Constitución Política de Colombia se tiene que

Art. 1. Colombia es un Estado social de derecho, organizado en forma de República unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, democrática, participativa y pluralista, fundada en el respeto de la Dignidad Humana, en el trabajo y la solidaridad de las personas que la integran y en la prevalencia del interés general (Constitución Política de Colombia, 1991).

A su vez, en otros apartados como el Artículo 25 “Toda persona tiene derecho a un trabajo en condiciones dignas y justas”, el Artículo 42 “la honra, la dignidad y la intimidad familiar son

inviolables” y el Artículo 51 “Todos los colombianos tienen derecho a la vivienda digna” se hace referencia a la dignidad en relación con una vida digna (Constitución Política de Colombia, 1991). Se señala estos apartados por sus referencias y unión con la dignidad, aunque si se hace un proceso de reflexión, implicando que tal vez, exista una interpretación diversa a los conceptos *dignidad* y *digna*, ya que el primero es intrínseco al ser humano, es decir que nace con ella, y el otro es dado a partir de características de índole socioeconómico. Cabe especificar que dentro de la Carta Constitucional se evidencia la dignidad como intrínseca y como elemento dado a partir de la conducta humana, por lo cual se entraría en conflicto sobre su definición. Lo anterior hace relación con lo expuesto por Olivares (2018, p. 32) quien especifica que la funcionalidad del concepto se da en tres lineamientos:

(i) La dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características (vivir como quiera). (ii) La dignidad humana entendida como ciertas condiciones materiales concretas de existencia (vivir bien). Y (iii) la dignidad humana entendida como intangibilidad de los bienes no patrimoniales, integridad física e integridad moral (vivir sin humillaciones).

Además, dentro de la aplicabilidad del concepto en el territorio colombiano, la dignidad se determina a partir del modelo económico, por lo cual se le da prioridad a la ganancia que al cumplimiento mismo del derecho y del valor fundamental. Un ejemplo de ello es la Ley 50 de 1990, la Ley 789 de 2002, la Ley 100 de 1993, donde su aplicación recae en la aplicación y consideración de la dignidad, atentando desde el goce de los derechos, principalmente los laborales.

Siguiendo los planteamientos de Montero (2015) y Carrillo y Umaña (2017), la dignidad en el país se puede configurar en tres periodos, generando así una caracterización diferente de la

comprensión y protección de la dignidad humana. Para las autoras, el primer periodo corresponde a los años entre 1992-1994 donde el concepto de dignidad tuvo poca caracterización en la jurisprudencia, posiblemente dado los inicios de la Constitución en el país, la ambigüedad en torno al concepto y la suposición sobre su definición (Ugarte, 1995). Se comprende a la dignidad como un valor de característica fundadora de valor absoluto que implica el trabajo del Estado para su cumplimiento; es decir tiene un carácter vinculante donde es finalidad del Estado su protección. Se encuentra en este lapso las sentencias T-499 de 1992⁸, T-571 de 1992⁹, C-542 de 1993¹⁰, C-221 de 1994¹¹ y C-224 de 1994¹². A nivel textual se encuentra la explicación del concepto de la dignidad humana como:

⁸ La Sentencia se sustenta en el PRINCIPIO DE DIGNIDAD HUMANA donde “*El respeto de la dignidad humana debe inspirar todas las actuaciones del Estado. Los funcionarios públicos están en la obligación de tratar a toda persona, sin distinción alguna. La integridad del ser humano constituye razón de ser, principio y fin último de la organización estatal*” (Sentencia No. T-499, 1992). De esta manera se hace un reconocimiento acorde a los principios de Derecho positivo, los cuales tienen su fundamento en el reconocimiento de la dignidad dentro del Estado Social. Las sentencias subsiguientes siguen a la misma línea, configurando con ello el concepto de dignidad desde una mirada jurídica de protección.

⁹ La Sentencia hace mención que “El derecho al mínimo vital (es decir el derecho a la subsistencia) es consecuencia directa de los principios de dignidad humana y del Estado Social de Derecho. Incluye tal derecho no sólo la facultad de neutralizar las situaciones violatorias de la dignidad humana, y de exigir asistencia y protección por parte de personas o grupos discriminados, marginados o en circunstancias de debilidad manifiesta (C.P. artículo 13), sino que, sobre todo pretende garantizar la igualdad de oportunidades en una sociedad que como la nuestra es injusta y desigual.” (Sentencia No. T-571, 1992)

¹⁰ La Sentencia menciona que “*Por su dignidad, el hombre es un fin en sí mismo y no puede ser utilizado como un medio para alcanzar fines generales, a menos que él voluntaria y libremente lo admita. Por tanto, el principio de la primacía del interés general, aceptable en relación con derechos inferiores, como el de la propiedad, no es válido frente a la razón que autoriza al ser humano para salvar su vida y su libertad, inherentes a su dignidad.*”. De esta forma, la dignidad implica el dote del razonamiento sobre la toma de decisiones sobre sí mismo. (Sentencia C-542, 1993)

¹¹ “La dignidad humana, que es un bien irrenunciable, está implícita en el fin que busca el hombre en su existencia. El ser humano es fin en sí mismo, ya que toda la finalidad terrena, de una u otra manera, está referida a su ideal de perfeccionamiento. Cada hombre, en el uso de su libertad, debe ser consciente de esto, pues sólo el hombre tiene la superioridad sobre los demás seres del universo.” (Sentencia C-221, 1994) En dicha Sentencia la dignidad se asocia con el principio de libertad. Se retoma en gran sentido la mirada cristiana, donde se le da superioridad al hombre frente a los demás seres del universo; marcando con ello la incidencia de ambas vertientes presentadas en el texto dentro de la jurisdicción colombiana

¹² “*Quienes suscribimos este salvamento reconocemos que entre la moral cristiana y los valores reconocidos por la Constitución hay numerosos puntos de contacto, en gran parte porque una y otra se fundamenta en el reconocimiento de la dignidad intrínseca de la persona humana*” (Sentencia No. C-224, 1994). Esta Sentencia corresponde al paso que se desarrolla en los procesos de reflexión del paso de dignidad cristiana a dignidad kantiana, confiriendo así reflexiones sobre el concepto y sus implicaciones dentro de un país “laico”.

El principio fundamental de la Dignidad Humana no sólo es una declaración ética sino una norma jurídica de carácter vinculante para todas las autoridades (CP art. 1). Su consagración como valor fundante y constitutivo del orden jurídico obedeció a la necesidad histórica de reaccionar contra la violencia, la arbitrariedad y la injusticia, en búsqueda de un nuevo consenso que comprometiera a todos los sectores sociales en la defensa y respeto de los derechos fundamentales [...] Su dignidad depende de la posibilidad de autodeterminarse (CP Art. 16). Las autoridades están precisamente instituidas para proteger a toda persona en su vida, entendida en un sentido amplio como "vida plena". La integridad física, psíquica y espiritual, la salud, el mínimo de condiciones materiales necesarias para la existencia digna son elementos constitutivos de una vida íntegra y presupuesto necesario para la autorrealización individual y social (Sentencia T-499/92, Corte Suprema de Justicia, pp. 3-4) (Magistrado Eduardo Cifuentes Muñoz).

Un segundo periodo en la configuración del concepto de dignidad humana se desarrolla entre los años 1995-2008, donde se exhibe un aumento en la jurisprudencia y un cambio en el paradigma a la hora de comprender la dignidad. De acuerdo con las autoras, la dignidad humana es comprendida como un derecho fundamental, el cual debe ser reclamado en caso de violación o falta de cumplimiento a través del uso de la tutela. Este giro corresponde al desarrollo fundamentado en la mirada de la dignidad como principio y valor, y dado a partir de la reflexión de la Sentencia C-224/94 donde se presenta un reconocimiento de la dignidad en torno a la relación moral-derecho, dejando la visión cristiana y pasando a una comprensión de la visión kantiana, involucrada con un Derecho Positivo. El punto que marca esta nueva mirada es la Sentencia T-881 de 2008, la cual fija como objetivo la protección de la dignidad humana de acuerdo con el marco jurídico colombiano. Otras sentencias representativas son la T-036 de 1995, T-146 de 1996, C-239 de 1997, T-265 de 1999, T- 1227 de 2000, T-1030 de 2003, T-367 de 2004, T-1183 de 2004, T-965 de 2005, C- 355 de 2006 y T-655 de 2008 (Carrillo y Umaña, 2017, p. 30). Cabe destacar las sentencias en torno a la eutanasia, como lo es la Sentencia C- 239 (1997) (Magistrado Carlos

Gaviria Diaz), donde se retoma el concepto y se establecen las bases de una nueva forma de verla, reflexionando sobre la situación real, la subsistencia y el vivir adecuadamente; gracias a dicha sentencia el valor de la dignidad deja de ser intrínseco, comprendiendo la muerte digna, algo que no era concebido en otras normativas a nivel internacional y nacional .

Además, si el respeto a la dignidad humana irradia el ordenamiento, es claro que la vida no puede verse simplemente como algo sagrado, hasta el punto de desconocer la situación real en la que se encuentra el individuo y su posición frente al valor de la vida para sí. En palabras de esta Corte: el derecho a la vida no puede reducirse a la mera subsistencia, sino que implica el vivir adecuadamente en condiciones de dignidad [...] El derecho fundamental a vivir en forma digna implica entonces el derecho a morir dignamente, pues condenar a una persona a prolongar por un tiempo escaso su existencia, cuando no lo desea y padece profundas aflicciones, equivale no sólo a un trato cruel e inhumano, prohibido por la Carta (CP Art.12), sino a una anulación de su dignidad y de su autonomía como sujeto moral. La persona quedaría reducida a un instrumento para la preservación de la vida como valor abstracto (Sentencia C- 239, 1997).

Para el 2002 se emplea una configuración en torno al concepto de dignidad, basado en la Sentencia T-881 de 2002¹³ y expuesto con anterioridad a través de los tres lineamientos consolidados por Olivares (2018). A partir de la fecha se empezaron a hacer cambios y reflexiones en temas de controversia, tanto a nivel jurídico como social. Este segundo periodo fue muy fructífero para hablar sobre dignidad humana, ejemplo de ello es la adjudicación de la autonomía

¹³ “Esta llamada “concepción antropológica” surge de la interpretación que ha realizado la Corte Constitucional del enunciado normativo de la dignidad humana, en estrecha relación con el tercero de los imperativos categóricos kantianos, en el que se postula uno de los principios básicos de la filosofía práctica kantiana así: “obra de tal forma que la máxima de tu actuación esté orientada a tratar a la humanidad tanto en tu persona como en la persona de cualquier otro como un fin y nunca como un medio”, del cual la Corte ha extraído la idea según la cual el “hombre es un fin en sí mismo”, lo que ha significado prácticamente una concepción antropológica de la Constitución y del Estado, edificada alrededor de la valoración del ser humano como ser autónomo en cuanto se le reconoce su dignidad” (Sentencia T-881, 2002). En esta se solidifica la forma de comprender a la persona, orientado a la dignidad desde un enfoque antropológico valorado, pero entrando en gran complejidad con la definición y comprensión de “persona”.



y la garantía de la intangibilidad a la moral dentro de la comprensión del concepto (Montero, 2014). Lo anterior se generó a partir de la Sentencia C-355 de 2006 (Magistrados: Jaime Araújo Rentería y Clara Inés Vargas Hernández), la cual corresponde a la despenalización del aborto, dotando así a la dignidad de un enfoque exclusivamente antropológico, pero sin desligar algunos tintes en torno a la visión cristiano, en casos específicos:

La dignidad humana asegura de esta manera una esfera de autonomía y de integridad moral que debe ser respetada por los poderes públicos y por los particulares. Respecto de la mujer, el ámbito de protección de su dignidad humana incluye las decisiones relacionadas con su plan de vida, entre las que se incluye la autonomía reproductiva, al igual que la garantía de su intangibilidad moral, que tendría manifestaciones concretas en la prohibición de asignarle roles de género estigmatizantes, o infringirle sufrimientos morales deliberados [...] como la persona conforma un todo integral y completo, que incorpora tanto los aspectos puramente materiales, físicos y biológicos como los de orden espiritual, mental y síquico, para que su vida corresponda verdaderamente a la dignidad humana, deben confluír todos esos factores como esenciales en cuanto contribuyen a configurar el conjunto del individuo (Sentencia C-355, 2006).

El tercer periodo se exhibe del 2009 a la fecha, donde la dignidad humana se consolida como derecho y se hace una reflexión en torno a sus reglas de aplicación. Se encuentran las sentencias T-009 de 2009, T-740 de 2010, T-973 de 2011, T-661 de 2012. T-982 de 2012, T-1078 de 2012, T-857 de 2013 y T-381 de 2014¹⁴ (Carrillo y Umaña, 2017, p. 30). En este periodo se desarrolla una mirada enfocada a la dignidad en torno al cumplimiento, focalizando una relación entre lo plasmado en el papel y la realidad; por tal motivo se exhiben mayores reflexiones sobre la

¹⁴ Dentro de la sentencia se hace mención sobre “[...] *Aquellas intervenciones orientadas a restablecer la apariencia normal de las personas se ligan estrechamente con el reconocimiento de su dignidad y con la necesidad de no vulnerar tal dignidad, se consideran incluidas en el Plan Obligatorio de Salud y no pueden catalogarse como intervenciones superfluas con fines de embellecimiento*” (Sentencia T-381, 2014); de esta manera la dignidad se establece como un reconocimiento en torno a elementos más allá de la esencia, acompañando una mirada utilitarista, implementando así un nuevo camino a la evolución del concepto.

dignidad humana y la atención en salud (prestación de servicios, hacinamiento de pacientes, negación de medicamentos, negación de tratamientos); la dignidad humana y las condiciones laborales (vulneración del derecho al trabajo, precarización laboral). La tutela se configura como elemento rector para la aplicación de la dignidad humana (Velasco, 2013).

2.2. CONCEPTO DE DIGNIDAD DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A LA LUZ DE LA JURISPRUDENCIA COLOMBIANA Y ALGUNAS SENTENCIAS DE LA CORTE.

En la sección anterior se ha hecho hincapié en una revisión teórica sobre la dignidad humana, sobre sus reflexiones, acciones y diversas opiniones, tanto a nivel internacional como nacional. De acuerdo con la Declaración de Ginebra y la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas se establece que los niños, niñas y adolescentes se configuran como sujetos de derecho, por lo que se reconoce la necesidad de brindarles protección y asistencia especial. La Convención Americana de Derechos Humanos también establece que los niños tienen derechos y deben ser protegidos dada su condición de personas menores de edad.

Como punto de partida es necesario reflexionar en torno a los conceptos como niñez e infancia, dado que la configuración mental en torno a ellos se refleja en el ámbito social y jurídico. De acuerdo con Cabrera (2017) los planteamientos en torno a la dignidad del niño y la niña responden a un proceso de evolución del concepto, proporcionando un cuadro para la integración dentro del género humano. El primer paso corresponde a comprender que la palabra niño desde una mirada de sujeto-objeto, por lo cual el niño carece de dignidad a ser objeto del adulto, sin la posibilidad de tomar sus decisiones y de ser autónomo de sus actos. Esta reflexión en torno a los cambios de paradigma se estableció en párrafos anteriores, pero es de vital relevancia mencionarlo

nuevamente. Siguiendo a la autora, el concepto de niño tiene una fuerte carga cultural, ya que “el concepto de dignidad originalmente era impensable para el niño o niña porque está subordinado al poder del adulto [...] sin autonomía”; en la que se relaciona de manera superior al adulto. Se resalta que, al momento que se configura a la dignidad como un valor inherente, esta carga cultural desaparece, dotando de un reconocimiento a niños y niñas, como parte de una sociedad humana.

En 1959 se establece la Declaración sobre los Derechos del Niño por parte la Organización de las Naciones Unidas, reconociendo principios e intereses aplicables; dicho documento solo se adoptó por parte de los estados a través del tratado titulado Convención Internacional sobre los Derechos del Niño en 1989. Este paso evidencia el interés por la protección de la niñez y el reforzamiento en torno a comprender la situación de los niños como sujetos de derecho y no como objetos de protección, vulnerables a la violación de sus derechos fundamentales. De esta manera, se incorpora la protección integral como enfoque de los Estados miembros.

Colombia reconoce la Convención mediante lo estipulado sutilmente en la Ley 12 de 1991, donde se establece una prohibición al reclutamiento de forma ilícita de los menores de 15 años – luego pasó a ser de 18 años. A partir del reconocimiento, la legislación colombiana estableció nuevos estándares en torno a los derechos de los niños, niñas y adolescentes; lo cual se materializó en la Ley de la infancia y la adolescencia. Dicha Ley fue el paso más importante para dotar a los niños de un interés superior, una participación y una protección; y de dar cumplimiento a los principios establecidos en la Convención de los Derechos del Niño. A continuación, se hará una reflexión en torno a los principios, prestando atención al principio de dignidad, dado el interés y el hilo conductor del presente texto.

El principio de protección de los derechos del niño se establece como elemento rector de la Convención, esto entra en reflexión en el contexto colombiano a través de la Sentencia C-839 de 2001 donde se establece que los niños, niñas y adolescentes son sujetos de protección constitucional, la cual se configura como elemento clave para el desarrollo armónico e integral. La protección abarca aquellas formas de violencia, tanto física o mental, como el abandono u otras que den cuenta de la violación y vulneración de los derechos fundamentales.

De acuerdo con la Declaración de los Derechos del Niño, y siguiendo los planteamientos de Jiménez & Domínguez (2001) en torno al principio de Dignidad, se tiene que:

El niño gozará de una protección especial y dispondrá de oportunidades y servicios, dispensado todo ello por la ley y por otros medios, para que pueda desarrollarse física, mental, moral, espiritual y socialmente en forma saludable y normal, así como en condiciones de libertad y dignidad (Declaración de los Derechos del Niño, 1959).

Dicha protección abarca elementos de salud, educación, vivienda, y otros en los cuales se dé cuenta del cumplimiento de los intereses superiores del niño, dando así correspondencia a la asistencia adecuada.

El Código de la Infancia y la Adolescencia desarrollado por el Congreso colombiano comprende a la dignidad humana de niños, niñas y adolescentes como un reconocimiento ligado a la igualdad y a la no discriminación. En su Artículo 1¹⁵ hace mención que el Estado es aquel que garantizará el desarrollo y protección estableciendo normas sustantivas y procesales que garanticen los derechos y libertades consagradas en instrumentos internacionales como nacionales. Además, se

¹⁵ Artículo 1°. Finalidad. Este código tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna. (Código de la Infancia y la Adolescencia, 2006)

hace hincapié del papel de la familia y la sociedad, como garantes, al igual que el Estado, de estos derechos. Dentro del documento se exhibe la dignidad como elemento primordial de la calidad de vida.

Artículo 17. Derecho a la vida y a la calidad de vida y a un ambiente sano. Los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a la vida, a una buena calidad de vida y a un ambiente sano en condiciones de dignidad y goce de todos sus derechos en forma prevalente (Código de la Infancia y la Adolescencia, 2006).

Otro ejemplo de la dignidad humana de los niños en la jurisdicción se encuentra en la Sentencia T-260 de 2012¹⁶ (Magistrado: Humberto Antonio Sierra Porto) donde la dignidad humana en el niño se configura como componente esencial del derecho a la salud.

Este derecho [el de la salud] debe ser interpretado de forma amplia, de manera que su ejercicio solo no se predica cuando peligra la vida como mera existencia, sino que, por el contrario, ha considerado la propia jurisprudencia que “(...) *salud comporta el goce de distintos derechos, en especial el de la vida y el de la dignidad*”. Resaltando que la misma es “*es esencial para el mantenimiento de la vida en condiciones dignas [...] la Corte tuteló el derecho fundamental del menor a la salud integral y a la dignidad humana recordando que la Constitución compromete de manera solidaria a la familia, a la sociedad y al Estado para que, de consuno, colaboren con la debida realización de los derechos fundamentales de los niños* (Sentencia T-260, 2012)

¹⁶ En la sentencia prima una mirada proteccionista, optando con ello a que la evolución de concepto no conciba al niño como sujeto de derechos. De manera adicional se impera y se instauro el Principio del Interés Superior del Menor, abriendo paso a la generación de un debate proteccionista de los niños, niñas y adolescentes. “*Los niños, en virtud de su falta de madurez física y mental -que les hace especialmente vulnerables e indefensos frente a todo tipo de riesgos-, necesitan protección y cuidados especiales, tanto en términos materiales, psicológicos y afectivos, como en términos jurídicos, para garantizar su desarrollo armónico e integral y proveer las condiciones que necesitan para convertirse en miembros autónomos de la sociedad. Atendiendo esta norma básica contenida en el preámbulo de la Convención sobre los Derechos del Niño y en la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia, exige la obligación de prodigar una especial protección a aquellos grupos sociales cuya debilidad sea manifiesta, destacándose entre estos grupos la especial protección de los niños, la cual es prevalente inclusive en relación con los demás grupos sociales*” (Sentencia T- 260, 2012)

Es importante resaltar que el supuesto en torno a la comprensión de los derechos de los menores de edad se fundamenta en la Constitución, los tratados y la Ley, configurando así que el Estado, a través de su jurisdicción sea el garante de la dignidad de niños, niñas y adolescentes. Dada la integralidad de la dignidad humana en dicha población se genera un proceso triple donde la dignidad corresponde tanto a un derecho de tipo sustantivo, como a un principio interpretativo y de norma de procedimiento, como lo establece la Sentencia C-113 de 2017 (Magistrada María Victoria Calle Correa) donde:

[...], consecuencia necesaria de su dignidad, se establece que la finalidad de la protección debida a los menores consiste en *garantizar su desarrollo armónico e integral*, así como *el ejercicio pleno de sus derechos* [...] en el ordenamiento jurídico actual, es indiscutible el reconocimiento de los menores de edad como sujetos de derecho; que, en ejercicio de la dignidad, son partícipes activos en el destino de su propia existencia, y que, atendiendo a condiciones especiales de vulnerabilidad, deben ser protegidos integralmente por parte de la familia, la sociedad y el Estado con miras a lograr el pleno desarrollo de sus capacidades, de manera autónoma y libre. En este escenario, el *interés superior del menor*¹⁷ se constituye en un eje *transversal con efecto expansivo* (Sentencia C-113, 2017).

El efecto expansivo al que se refiere implica la conformación y el análisis de un cuerpo normativo donde la protección se basa en un desarrollo pleno e integral, respondiendo de forma holística con la configuración física, mental, emocional, social y moral que necesita un niño, niña y adolescente para el ejercicio de sus derechos. A diferencia de otros derechos, la dignidad humana tiene un carácter de instrumentalización, en el caso de la infancia, se construye el Interés Superior de la Niñez, el cual corresponde a las acciones y procesos a desarrollar por parte de la familia, la

¹⁷ “Es un principio de la Convención sobre los Derechos del Niño, cuya aplicación busca la mayor satisfacción de todas y cada una de las necesidades de niñas, niños y adolescentes. Su aplicación exige adoptar un enfoque basado en derechos que permita garantizar el respeto y protección a su dignidad e integridad física, psicológica, moral y espiritual” (Comisión Nacional de Derechos Humanos - México, s.f)

sociedad y, en especial medida, el Estado, para las garantías de los derechos y el alcance máximo del bienestar. En este sentido, no se desliga la mirada de objeto de protección tradicional, sino que se da un nuevo rumbo

3. ANÁLISIS DEL CONCEPTO DE DIGNIDAD EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES: LIMITACIONES DE APLICABILIDAD Y EFECTIVIDAD PRÁCTICA, EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA

El desarrollo de la Convención sobre los Derechos del Niño establece un punto importante para aquellos Estados miembros de las Naciones Unidas, ya que regula el desarrollo de leyes, decretos y demás normativa enfocada a garantizar el reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos. Esta garantía implica la formación y control por medio de organismos como el Comité de Derechos del Niño, quien cumple la función de ser un puente de comunicación para promover la ejecución de los reglamentos y principios clave en torno a la temática.

Los esfuerzos que realiza cada Estado miembro conllevan a la generación de herramientas que sirvan de utilidad para la implementación de las normativas basándose, principalmente, en la educación y en la formación de una cultura orientada al reconocimiento de los derechos humanos. Cabe mencionar que dichos esfuerzos muestran limitaciones en torno a la aplicabilidad y la efectividad práctica; por ello, el presente apartado tiene el objetivo de analizar el concepto de dignidad en su puesta en escena. Lo anterior se debe a que los derechos del niño no solo se tratan de valores separados, sino que se desarrollan correlacionados dentro de un marco ético, moral, espiritual, cultural y social; implicados como parte intrínseca de los grupos sociales.

Siguiendo los planteamientos de la UNICEF (2001), el párrafo 1 de la Convención con su Artículo 29 cumple un papel transcendental, dada la importancia dentro de este a la educación como elemento rector y de desarrollo para la proyección, promoción y apoyo al valor supremo

establecido: la dignidad humana de niños, niñas y adolescentes; la cual cumple el papel de ser innata e inalienable. Dicho párrafo establece que para la formación de tipo holístico del niño basada en una dignidad es primordial focalizar los esfuerzos al cumplimiento del derecho a la educación; la cual debe estar orientada al respeto de los derechos humanos, al potenciamiento de los valores como la identidad y la pertinencia, y a la integración en la sociedad y el medio ambiente. Claramente, haciendo el análisis correspondiente, hay una relación con el Artículo 28 de la Convención, ya que en este se reconoce el derecho a la educación como elemento para fortalecer las capacidades y fomentar el aprendizaje para el disfrute de los derechos.

Los Artículos 28 y 29 de la Convención se refieren al derecho a la educación del niño, niña y adolescente partiendo en el acceso y el contenido de esta. La formulación y aplicación de ambos en la realidad genera contradicciones, tanto a nivel teórico como metodológico, inicialmente por el reconocimiento de la identidad cultural del niño, por lo que la educación debe comprender la lengua y los valores propios de su lengua, su territorio y el grupo humano al cual se encuentra asociado ideológicamente. De manera singular, esta disposición muestra muchas diferencias a lo largo de la historia, principalmente por el desarrollo global de los sistemas educativos, como de los elementos políticos y económicos que subyacen. Es decir, existe un incumplimiento a la Convención que se constituye como una violación a la dignidad del niño, niña y adolescente.

En los procesos de formulación de la promoción de los derechos y de la dignidad del niño, la educación cumple un papel de suma importancia, siendo con ello el consolidador del disfrute de otros derechos y otros valores dados a los niños; los cuales se ven reflejados en la sociedad y materializados en el hogar y la escuela. Es papel del Comité desarrollar los mecanismos de

observación y de cumplimiento, donde se prime el respeto hacia la reducción de elementos de discriminación y de creación de prejuicios. De esta manera:

El objetivo general de la educación es potenciar al máximo la capacidad del niño para participar de manera plena y responsable en una sociedad libre y sus posibilidades de hacerlo. Debe hacerse hincapié en que el tipo de enseñanza que se concentra fundamentalmente en la acumulación de conocimientos, que estimula la competencia e impone los niños una carga excesiva de trabajo puede ser un grave impedimento para el desarrollo armonioso del niño hasta realizar todo el potencial de sus capacidades y aptitudes. La educación debe ser favorable a los niños y debe inspirar y motivar a cada uno de ellos. Las escuelas deben fomentar un clima humano y permitir a los niños que se desarrollen según la evolución de sus capacidades (UNICEF, 2001, p. 9)

Lo anterior hace que surja un sistema educativo orientado en los derechos humanos, no solo a nivel teórico, sino práctico, recreando contextos de experiencias donde el niño, niña y adolescente actúe de manera amplia. La Constitución Política de 1991 garantiza, a través del Artículo 67, el derecho a la educación: “la educación es un derecho de la persona y un servicio público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica y a los demás bienes y valores de la cultura”. La formación en torno a la educación basada en los derechos humanos, la paz y la democracia le corresponde al Estado, la sociedad y la familia.

La Ley 115 de 1994 – Ley General de Educación se configura como el instrumento legal principal para la formación integral del colombiano. En este se expone que “la educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural que se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus derechos y deberes” (Ley General de Educación, 1994). De esta manera se establece un proceso de tejido social, donde se vincula a la educación y a los derechos humanos como garantes de la dignidad y de los derechos que de esta

surgen. Es importante señalar que lo establecido en la Ley debe cumplir con los principios expuestos por la Constitución Política, partiendo de la libertad de enseñanza y el derecho a la educación.

La Ley 115 en sus Artículos 5¹⁸ y 14¹⁹ formula la obligatoriedad en torno a la educación en derechos humanos, haciendo hincapié en la concepción de elementos como la vida, la paz, la

¹⁸ ARTICULO 5o. Fines de la educación. De conformidad con el artículo 67 de la Constitución Política, la educación se desarrollará atendiendo a los siguientes fines: 1. El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva, ética, cívica y demás valores humanos. 2. La formación en el respeto a la vida y a los demás derechos humanos, a la paz, a los principios democráticos, de convivencia, pluralismo, justicia, solidaridad y equidad, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad. 3. La formación para facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan en la vida económica, política, administrativa y cultural de la Nación. 4. La formación en el respeto a la autoridad legítima y a la ley, a la cultura nacional, a la historia colombiana y a los símbolos patrios. 5. La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos, mediante la apropiación de hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber. 6. El estudio y la comprensión crítica de la cultura nacional y de la diversidad étnica y cultural del país, como fundamento de la unidad nacional y de su identidad. 7. El acceso al conocimiento, la ciencia, la técnica y demás bienes y valores de la cultura, el fomento de la investigación y el estímulo a la creación artística en sus diferentes manifestaciones. 8. La creación y fomento de una conciencia de la soberanía nacional y para la práctica de la solidaridad y la integración con el mundo, en especial con Latinoamérica y el Caribe. 9. El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la calidad de la vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de solución a los problemas y al progreso social y económico del país. 10. La adquisición de una conciencia para la conservación, protección y mejoramiento del medio ambiente, de la calidad de la vida, del uso racional de los recursos naturales, de la prevención de desastres, dentro de una cultura ecológica y del riesgo y la defensa del patrimonio cultural de la Nación. 11. La formación en la práctica del trabajo, mediante los conocimientos técnicos y habilidades, así como en la valoración de este como fundamento del desarrollo individual y social. 12. La formación para la promoción y preservación de la salud y la higiene, la prevención integral de problemas socialmente relevantes, la educación física, la recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre, y 13. La promoción en la persona y en la sociedad de la capacidad para crear, investigar, adoptar la tecnología que se requiere en los procesos de desarrollo del país y le permita al educando ingresar al sector productivo.

¹⁹ ARTICULO 14. Enseñanza obligatoria. En todos los establecimientos oficiales o privados que ofrezcan educación formal es obligatorio en los niveles de la educación preescolar, básica y media, cumplir con: a) El estudio, la comprensión y la práctica de la Constitución y la instrucción cívica, de conformidad con el artículo 41 de la Constitución Política; b) El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas culturas, la práctica de la educación física, la recreación y el deporte formativo, para lo cual el Gobierno promoverá y estimulará su difusión y desarrollo; c) La enseñanza de la protección del ambiente, la ecología y la preservación de los recursos naturales, de conformidad con lo establecido en el artículo 67 de la Constitución Política; d) La educación para la justicia, la paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo y, en general, la formación en los valores humanos, y he) La educación sexual, impartida en cada caso de acuerdo con las necesidades psíquicas, físicas y afectivas de los educandos según su edad. PARAGRAFO PRIMERO. El estudio de estos temas y la formación en tales valores, salvo los numerales a) y b), no exige asignatura específica. Esta formación debe incorporarse al currículo y desarrollarse a través de todo el plan de estudios. PARAGRAFO SEGUNDO. Los programas a que hace referencia el literal b) del presente artículo serán presentados por los establecimientos educativos estatales a las Secretarías de Educación del

democracia, la convivencia, el pluralismo, la tolerancia y la libertad. La cobertura de la Ley a nivel nacional exhorta a que la educación es obligatoria, fomentando con ello el respeto a la dignidad humana y el goce de los derechos. Al igual que gran parte de la normativa nacional e internacional, dentro de su conformación no se genera una definición clara de la dignidad. La reglamentación para ello se da con el Decreto 1860 de 1994, con la adjudicación a los proyectos pedagógicos como elementos rectores y de conformación en la activación de conocimiento educativo.

Las experiencias en torno al cumplimiento de los estándares nacionales e internacionales sobre la educación en derechos humanos han conllevado a grandes avances y a la implementación de nuevas estrategias de enseñanza, como lo es la Escuela Nueva; una propuesta orientada a la población rural que se caracteriza por un aprendizaje significativo a partir de los elementos contextuales y sociales, aplicados a la formación del ser humano de forma holística. Otros planes ejecutados y orientados a los derechos humanos corresponden a lo reglamentado por la Ley General de Educación, estos están contruidos a partir de la conformación de políticas públicas que orienten el desarrollo pedagógico basado en la investigación y en la adjudicación y formación de nuevos agentes educativos. De esta manera, la educación en derechos no solo se desarrolla en la escuela, sino en los ambientes de interacción social, primando en la familia.

Las políticas públicas orientadas a la educación en derechos humanos son aquellas acciones de orden político y administrativo que realiza el Estado para la adopción de nuevos programas y formas de cumplir con las necesidades e intereses de la sociedad. A partir de lo reglamentado en

respectivo municipio o ante el organismo que haga sus veces, para su financiación con cargo a la participación en los ingresos corrientes de la Nación, destinados por la ley para tales áreas de inversión social.

la Constitución Política y la Ley General de Educación Nacional, Colombia focaliza el reconocimiento de la educación a aquellos grupos sociales con alta vulnerabilidad, como lo son las comunidades indígenas. En torno a ello, la educación con un componente integral se sustenta en la dignidad del ser humano para conformar su identidad, en este caso particular de orden cultural, lo cual entra en correlación directa con el cumplimiento pleno de los derechos humanos. Claramente, la materialización en torno a la vulnerabilidad y el acceso a la educación de estos grupos “marginados” expone una problemática enorme, ya que las poblaciones han sido históricamente violadas en sus derechos fundamentales; por ejemplo, la enseñanza en su lengua nativa.

A partir de ello, se comprende que la Ley General de Educación, si bien presenta un marco normativo en la conformación y aplicación del derecho en la educación, las experiencias y evaluaciones en torno a ello son pocas, por lo cual la regulación del derecho y su reglamentación están conformadas por vacíos de orden metodológico y de aplicación. Ejemplo de ello es la falta de ordenación en torno a la temática en los niveles de educación superior y la postulación de los elementos en los planes decenales de Educación en Derechos Humanos. Lo anterior implica que no existen políticas públicas que estén de acuerdo con la normativa en torno a la educación en derechos humanos que respondan de manera efectiva a las necesidades y problemáticas de la población humana y que cumplan lo establecido por la Ley. La falta de políticas públicas orientadas a la educación de los derechos humanos exhibe el incumplimiento por parte del Estado de los derechos de los niños, niñas y adolescentes; dentro de este se incluye la dignidad humana. Además, se limita la función social de la educación.

Es importante resaltar el Artículo 5 de la Ley General de Educación, ya que expone en él los fines orientados a la función social. La educación tiene objetivo de velar por el pleno desarrollo de la personalidad, partiendo de una formación integral de valores humanos; los cuales se orientan de acuerdo con los derechos humanos y los principios democráticos. En particular, la dignidad se revela transversalmente por la triada en su comportamiento jurídico. Además, se exhibe la importancia de la generación de una identidad a través de la educación, vinculando esto con el Artículo 14 de la enseñanza en pro de la diversidad cultural y la recreación, como de la protección al medio ambiente. Esto señala que, en Colombia, la educación es la acción para la divulgación, ejemplificación y diseño de los derechos humanos, variando su organización y prestación de acuerdo con la reglamentación del Artículo 67 de la Constitución Política.

De manera adicional, el Decreto 1860 de 1994 y la Ley 715 de 2001 dictan las disposiciones para la organización de los servicios educativos, haciendo énfasis en los Proyectos Educativos Institucionales como las instancias para orientar y dar cumplimiento a los fines educativos basados en los derechos humanos, teniendo en cuenta condiciones de tipo social, económica y culturales. Es importante señalar que estos Proyectos son diseñados para la promoción integral de los derechos, partiendo de la importancia de la dignidad de la persona humana. Su formulación consiste en considerar a los niños, niñas y adolescentes, principalmente, como sujetos de derecho en formación, los cuales a través de la educación reciben las herramientas claves para la toma de conciencia y el reconocimiento de un proyecto personal que permita ejercer su ciudadanía plenamente y comprometida con los principios y valores de la Constitución Política. De esta manera, la educación experimenta la enseñanza, la adjudicación y la puesta en práctica de los derechos fundamentales.

Dentro del aprendizaje establecido, el niño es portador de una conciencia, la cual cambia de acuerdo con la adquisición de conocimientos y las experiencias en torno a los ambientes sociales y emocionales en los que se desarrolla. La educación brinda el ambiente idóneo para exponer los valores culturales sobre las personas, formando una comunidad educativa más allá de las aulas, imperando una necesidad de creación de espacios de justicia, solidaridad y comprensión del otro; como lo mencionan Jiménez & Domínguez (2001):

La educación debe siempre realizar un proceso de liberación de potencias humanas y crecimientos de libertad, cuya verificación y evaluación más efectiva se mide por sus resultados en términos de paz, haciendo de cada ser humano su sujeto activo y beneficiario a lo largo de todo el ciclo de su vida de manera permanente. (p. 407)

La implementación de políticas públicas basadas en las experiencias de formación y capacitación de los derechos humanos orienta y promueve la organización de nuevos modelos pedagógicos que permitan un desarrollo significativo donde se articulen la sociedad, planes de convivencias y organizaciones. De esta manera, los sujetos se forman en ambientes educativos democráticos de cumplimiento, ejecución y difusión. Los lineamientos curriculares que cumplen con este desarrollo pedagógico se centran en el fortalecimiento en las ciencias sociales, la democracia y las competencias ciudadanas. Ejemplo de las propuestas pedagógicas en el país en esta temática son las cátedras de afrocolombianidad, las actividades de divulgación en torno al género, la discapacidad, la multiculturalidad y la diferencia. Cabe mencionar que dichas actividades han encontrado en la práctica jurídica y educativa algunos inconvenientes por aquellos sujetos que fundamentan sus argumentos de enseñanza en la moralidad religiosa, vulnerando con ello derechos sustentados en la Constitución Política en la conformación de un Estado laico.

De igual forma, es importante señalar que no existe un sistema estructurado de formación docente que brinde la gestión sistemática y reflexiva de pedagogías enfocadas a la educación de los derechos humanos; por lo cual se presentan incongruencias en la práctica materializadas en la discriminación, rechazo ideológico y críticas a la movilización de pensamientos. Universidades como la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia desarrollan los primeros pasos para la formación educativa de docentes en derechos humanos a través de la licenciatura en derechos humanos y educación comunitaria. A través de eso, se forman profesionales que enfatizan en acciones de defensa y protección de los derechos en un sistema educativo pobre y con grandes brechas socioeducativas.

Para mitigar dichas problemáticas, se fomenta un Plan Nacional para la Educación en Derechos Humanos y de Derecho Internacional Humanitario, basado en el concepto de la dignidad humana, primando con ello la importancia de la formación integral de niños, niñas y adolescentes en un Estado Social de Derecho. Es importante resaltar que la dignidad se define en este sentido como:

El presupuesto esencial de la consagración y efectividad del entero sistema de derechos y garantías contemplado en la Constitución, como principio fundante del Estado, que tiene valor absoluto no susceptible de ser limitado, ni relativizado en ninguna circunstancia (Ministerio de Educación Nacional, 2009).

Dejando de lado el enfoque educativo hacia la dignidad humana, se resalta la Ley 1098 de 2006, conocida como el Código de la Infancia y la Adolescencia. Este documento en su Capítulo 1, Artículos 1, 2 y 3 expone sus principios y definiciones, los cuales establecen un marco de gran importancia para la comprensión de los niños, niñas y adolescentes como sujetos titulares de derechos.

Artículo 1°. *Finalidad.* Este código tiene por finalidad garantizar a los niños, a las niñas y a los adolescentes su pleno y armonioso desarrollo para que crezcan en el seno de la familia y de la comunidad, en un ambiente de felicidad, amor y comprensión. Prevalecerá el reconocimiento a la igualdad y la dignidad humana, sin discriminación alguna.

Artículo 2°. *Objeto.* El presente código tiene por objeto establecer normas sustantivas y procesales para la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes, garantizar el ejercicio de sus derechos y libertades consagrados en los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, en la Constitución Política y en las leyes, así como su restablecimiento. Dicha garantía y protección será obligación de la familia, la sociedad y el Estado.

Artículo 3°. *Sujetos titulares de derechos.* Para todos los efectos de esta ley son sujetos titulares de derechos todas las personas menores de 18 años. Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 34 del Código Civil, se entiende por niño o niña las personas entre los 0 y los 12 años, y por adolescente las personas entre 12 y 18 años.

Estos artículos dan cuenta de algunas realidades importantes a la hora de hablar del reconocimiento que tienen los niños, niñas y adolescentes. El primero de ellos es establecer una mirada enfocada al bienestar y al cuidado, sin desligar el papel como sujetos titulares de derechos. Además, generar dentro del reconocimiento una importancia, posiblemente equilibrada, entre los derechos de igualdad y de dignidad; como de la misma adolescencia. En este punto, el reconocimiento implica unas convenciones de tipo social, las cuales están ligadas con el desarrollo y la formación, primando cualidades de honor, sinceridad, valencia y lealtad (Gonzales & León, 2013).

De acuerdo con Gonzáles & León (2013) el inconveniente técnico y metodológico de la Convención es la reglamentación y las aseveraciones que se realizan a partir de las interpretaciones en torno a la dignidad en una sociedad en la cual desconoce el concepto en la práctica. De este

modo, se entra en el proceso de falta de reconocimiento, no solo de la dignidad, sino del niño, niña y adolescente dentro un constructo social, violando con ello las disposiciones establecidas por parte de la Convención. Es importante resaltar que la Ley 1098 tiene como antecedente rector el Código del Menor o el Decreto 2737 de 1989, el cual, de acuerdo con la UNICEF en el 2007, se quedó corto en el establecimiento de los derechos de los menores de 18 años, presentando características irregulares y de no normalización en torno a la garantía de derechos (Cely, 2015).

La Ley 1098 ha forjado para el cumplimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescente una agenda pública que permita coordinar a diferentes instancias con el fin de mejorar las condiciones de vida en torno a elementos sociales, familiares, económicos, psicosociales y ambientales. Gran parte de las políticas públicas buscan implementar la dignidad enfocada a estas condiciones, por lo cual se forjan en torno a planteamientos como “trabajo infantil, reclutamiento forzado, abuso sexual, explotación sexual infantil, maltrato infantil, consumo de sustancias psicoactivas, embarazo en adolescentes, entre otras” (Cely, 2015, p. 46). Lamentablemente,

La situación de la niñez en Colombia, como se referencia en las observaciones del comité de los derechos del niño [...] demuestran un incumplimiento a los compromisos en relación con la convención de los derechos de estos y sus protocolos facultativos. Las políticas públicas y acciones determinadas en el marco jurídico nacional para el fortalecimiento de los NNA [Niños, niñas y adolescentes] como sujetos de derecho y la garantía de estos, no han sido medidas suficientes puesto que la niñez y la adolescencia aún se encuentran inmersas en contextos familiares y sociales, reflejo de las condiciones estructurales desiguales del país que fomentan la inequidad y el mantenimiento de las variables que perpetúan el riesgo y vulneración (p. 46).

De esta manera, la perspectiva real de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos en torno a la dignidad está en proceso de formulación, ya que presenta una mirada idílica de la

protección y el cuidado. Primando en ello elementos sociales y culturales que presentan las variables de incidencia significativas, ya que a partir del protagonismo de estas puede desarrollarse un cambio transcendental en la concepción.

CONCLUSIONES

El concepto de dignidad humana se instaure dentro del Derecho como elemento fundamental en la concepción global del ser humano. El concepto en la actual esfera jurídica y legal retoma elementos semánticos provenientes de una mirada filosófica y cristiana, vinculando entre ellas una interpretación que se ajuste al cuadro normativo que haga uso de ella. Su utilización implica un recorrido histórico y una amplia cobertura sobre dignidad y vida digna, siendo ambas expresiones equiparables para hacer referencia a un reconocimiento de los derechos y de la integridad. Es decir que existe un proceso evolutivo del concepto, lo cual implica el desarrollo de una posición jurídica sobre el ser humano (incluyendo a los niños, niñas y adolescentes).

El reconocimiento de la dignidad en su esfera jurídica y social lo dota de una serie de características, beneficios y acciones reguladas y establecidas por normativas internacionales y nacionales. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es el documento e hito histórico de mayor relevancia para comprenderla, brindando con ello el desarrollo de otros principios, valores y derechos, como lo es la igualdad y la libertad. Por su importancia, la Declaración es el sustento teórico e instrumental para la formulación de tratados internacionales y Constituciones de los países; ejemplo de ello es la Constitución Política de la República de Colombia, donde se instaure el derecho de la dignidad.

La dignidad es un concepto usado por el Estado para otorgar igualdad sin importar las variables de raza, sexo, religión, entre otros que caracterizan la desigualdad. En el recorrido histórico se encuentra que el reconocimiento está ligado a la marginación o a los grupos excluidos

por una sociedad patriarcal y heteronormativa. Razón de ello es la implementación y adjudicación de la dignidad a diferentes grupos humanos, como lo son los negros, las mujeres y los niños. En relación con estos últimos es necesario destacar su conceptualización, ya que históricamente se arguyen como objetos o propiedad del padre. En relación con esto, Cabrera (2017) menciona que:

El concepto de dignidad originalmente era impensable para el niño o niña porque está subordinado al poder del adulto, sin racionalidad, sin autonomía, sin poder tomar decisiones. Este concepto se ha heredado como parte del acervo cultural que no se reflexiona pasado de una a otra generación, simplemente se asume y se crea una realidad: el niño o niña carece de dignidad, está sometido al adulto como objeto –cosa de su propiedad. Esto es una muestra del vacío histórico de la reflexión ética sobre el niño o niña. Esta reflexión se ha hecho sobre el hombre, el ciudadano reconocido por su origen, su nobleza o su posición obtenida en cargos públicos. Hasta el momento no se llega a cristalizar la reflexión ética sobre la dignidad del niño o niña como ser en sí mismo.

El paso del niño de objeto de protección a sujeto de derecho cambió los paradigmas en la legislación y la jurisprudencia, dotando a los niños, niñas y adolescentes de un reconocimiento a nivel holístico y de una garantía en torno a sus derechos como seres humanos en formación; es decir que da cuenta de una evolución del concepto. Lo anterior hace que se establece como un ser humano, el cual es pensante, con dignidad y que posee las características para la toma de decisiones; sin la necesidad inicial de tener una voz por parte de un tercero (su padre). Claramente en la práctica existen problemáticas asociadas con la conceptualización tradicional, ya que se replican análisis sobre la patria potestad y aplicación del término “infante” (no hablante) para dar paso a planteamientos sobre la dignidad; sin importar que con la utilización de estos se promueva la idea cultural que el padre es poseedor del niño-objeto.

Los cambios de paradigma no solo implicaron la transformación del niño, sino la evolución del concepto de *dignidad*, dado que entra en un nuevo esquema de interpretación asociado con el ser humano de corta edad. Al asumir que los niños tenían dignidad y eran sujetos de derechos, la dignidad pasó a considerarse como elemento de reconocimiento de la dignidad humana y, por ende, desde el punto de vista ontológico, un valor inherente. A nivel internacional, esta concepción permitió el desarrollo de convenciones y declaraciones, donde se destaca la Convención de los Derechos del Niño. Si bien, el niño al ser parte de la especie humana tiene dignidad, esta estaba limitada dentro de su posición jurídica, la cual fue cambiando a partir de la evolución misma del concepto.

Los resultados reflexivos de la Convención integran y proponen el desarrollo del concepto de dignidad en los niños, niñas y adolescentes como un poder en proceso de establecimiento, ya que los cambios culturales sobre la concepción del niño no pueden cambiar de un día para otro, sin importar los avances en la materia. La transformación del niño reconoce su pertinencia al género humano, concretando con ello la pertinencia de unos derechos y la consideración como sujetos de derecho; pero aún existe la batalla con la visión histórica de legitimación cultural, donde el niño entraba a ser de protección, cuidado y sometimiento del adulto-cuidador. En este sentido, los Estados orientan diferentes acciones para un tránsito regulado que prime de la manera más rápida y adecuada los intereses de los niños, eliminando la deshumanización y la instrumentalización de estos en las esferas tradicionales (Cabrera, 2017).

De acuerdo con los planteamientos de Cajiao (1998), el reconocimiento de la dignidad le da la oportunidad a los niños, niñas y adolescentes de ser parte de un grupo social, construyendo con ello la ciudadanía. En este sentido, entra el sistema educativo como elemento rector y

formador, reconociendo al niño como sujeto en formación y en la construcción de valores, derechos y deberes. De este modo, la escuela posee una función social más allá de brindar conocimientos básicos formadores, sino que se atestigua como parte del desarrollo humano. Cabe aclarar que, al concebir la educación como un derecho, ligado también a la dignidad, se generan cambios en la concepción elitista de la formación escolar, trasformando la cobertura y los mecanismos de integración.

La Ley General de Educación Colombiana se comporta como elemento rector en la enseñanza y promulgación de los derechos humanos, primando la dignidad humana. De esta manera se crean ambientes educativos democráticos de formación ciudadana, donde los niños, niñas y adolescentes aprendan, ejecuten y se formen desde una perspectiva crítica de lucha, protección y adquisición de derechos humanos para su reconocimiento y su dignidad. Lamentablemente, la realidad del sistema educativo y la perspectiva cultural cumple en el cuerpo legal sobre la educación de derechos humanos un papel insuficiente y sin garantías que se pone en evidencia en el discurso educativo, como en la práctica social.

En Colombia, el ejercicio de la aplicación y reflexión humana de la dignidad en niños, niñas y adolescentes atiende a la mirada funcional del enunciado, donde la Corte Constitucional la identifica a partir de tres lineamientos: 1) como principio fundante del ordenamiento jurídico y valor dentro de un Estado social de derecho; 2) como principio constitucional de gran relevancia y 3) como derecho fundamental autónomo (inalienable). Su reconocimiento sobrelleva las recomendaciones de la UNESCO donde se estipula que “La educación para la comprensión, la cooperación y la paz y la educación relativa a los derechos humanos y las libertades fundamentales” (Recomendación sobre la Educación para la Comprensión, la Cooperación y la

Paz Internacionales y la Educación relativa a los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, 1974) debe partir de concebir a la educación como un proceso de tipo global donde socialmente hay un aprendizaje orientado al desarrollo consciente de la comunidad en beneficio a esta.

La evolución del concepto de la dignidad de los niños, niñas y adolescentes a la par de la evolución de la dignidad humana da cuenta del posicionamiento jurídico de estos. Considerar al niño como sujeto de derechos implica entonces que tendrá que ejercer derechos y deberes acordes a una autonomía progresiva, la cual estará sustentada, por ende, en el interés superior del niño y en las medidas que se establezcan para la comprensión de sus facultades. El sistema educativo le permitirá que adquiera las capacidades para el ejercicio de sus derechos y deberes, mientras que este genere un proceso de maduración en relación con conocimientos, competencias y aprendizajes.

El reconocimiento de los niños, niñas y adolescentes se vincula en el proceso de cambio a la hora que el niño ejerce una participación en la sociedad, siendo acreedor y solicitador de derechos en torno a la vida, la supervivencia, la identidad, a la familia, a la igualdad, a la no discriminación, al desarrollo integral, a la protección de la salud y la seguridad social; entre otros que se desligan de la mirada fundamental. Es importante resaltar que el proceso de ejecución de los derechos concretos para la niñez es de gran importancia, ya que se reconocen como sujetos con necesidades de protección especial (González & León, 2013). De esta manera se recae en una posible contradicción (sujeto-protección) y se intenta solucionar la condición de objetos, imprimiendo la idea que son seres humanos titulares de sus propios derechos.

La titularidad de derechos hace que en la realidad se establezcan necesidades y procedimientos que permitan el desarrollo pleno, lo que refleja una visión diferente del concepto de infancia. Los niños, niñas y adolescentes, a partir de la Convención, tienen un posicionamiento dentro de un grupo social, lo que los hace miembros de una comunidad, estableciendo derechos y responsabilidades en sus diferentes etapas del desarrollo. De esta manera, el concepto de dignidad humana pasa a asimilarse con el de bienestar, hilando las acciones en torno a la vida digna (calidad básica de vida). Para ese bienestar el padre, o la persona a cargo, es la encargada de establecer un proceso de orientación, que permita el desarrollo de decisiones autónomas y de la aplicabilidad de sus derechos.

A pesar de la puesta en práctica del Convenio y de la generación de leyes, decretos y protocolos, la realidad en torno a la dignidad humana posee grandes inconvenientes, estableciendo con ello una relación entre el derecho abstracto y las realidades concretas. Han pasado bastantes años desde la Convención y la idea sobre el bienestar del niño como elemento rector de los Estados partícipes genera aún dudas, ejemplo de ello son los índices de pobreza, desnutrición, malos tratos, abandonos y desigualdad en gran parte del territorio colombiano, principalmente, en el área rural; como de la falta de cumplimiento del interés superior del menor. Cabe mencionar que estos resultados se deben a una centralización en torno a los recursos, como a características de violencia que han perdurado en las zonas rurales, lo que propone altos índices de violación de derechos para niños, niñas y adolescentes.

Los derechos de los niños implican por ello un compromiso por parte del Estado, el cual se vuelve planeador de leyes y políticas que conviertan en acciones tangibles el compromiso de las partes de la Convención. Como hace mención González M. (2013, p. 662)

[...] El desafío más complejo consiste en romper con las viejas ideas y prejuicios sobre las incapacidades de niñas y niños que han tenido como consecuencia que su reconocimiento [es decir, su dignidad] como titulares de derechos sea más aparente que real. Ello implica aceptar la complejidad del actual marco constitucional, y el conocimiento de las dificultades y obstáculos para el ejercicio de los derechos, pero principalmente, asumir la tarea de que los principios rectores de la Convención sobre los Derechos del Niño deben estar presentes en cualquier interpretación en relación con los derechos de niñas, niños y adolescentes.

De esta manera, el Estado, en conjunto con la familia, la Escuela y otras instituciones se convierten en las herramientas procesales para proporcionar los servicios adecuados para el bienestar de la niñez y la adolescencia, dando con ello un enfoque de vida digna que lleve, por ende, a la dignidad humana.

Finalmente, dentro del texto se ha reflexionado en torno a la dignidad del niño, niña y adolescente, partiendo de la contextualización histórica y cultural. Se establece que la Convención de los Derechos del Niño funge como principio de cambio, incidiendo en un poder horizontal que permite la integración del grupo al género humano. A partir de ello, se establece el paso de objetos de protección a sujetos de derecho, afirmando así un reconocimiento a nivel social, pero con poco sustento en las esferas culturales y en la aplicación en el contexto real. Por tal motivo, la educación, como herramienta, permite que los niños, niñas y adolescentes aprendan y comprendan sus facultades en relación con derechos y deberes; formando así ciudadanos orientados en la toma de decisiones.

Bibliografía

- Andorno, R. (1998). *Bioética y dignidad de la persona*. Madrid: Tecnos.
- Arias, B. (2017). La infancia como sujeto de Derechos. Un análisis crítico. *Ratio Juris*, 12(24), 127-142.
- Buriricá, D. (2014). El concepto de persona humana en la tradición cristiana y su progresión hasta el personalismo. *Cuestiones teológicas*, 41(96), 467-493.
- Cabrera, E. (2017). Reflexión sobre la dignidad del niño y niña. *Revista colombiana de bioética*, 12(2), 90-100. doi:<https://doi.org/10.18270/rcb.v12i2.1924>
- Cajiao, F. (1998). Niños y jóvenes como ciudadanos de pleno derecho. En *La participación de niños y dolescentes en el contexto de la Convención sobre los derechos del niño: visiones y perspectivas* (págs. 17-31). Bogotá: Fondo de Naciones Unidas para la Infancia.
- Cardona, J. (2012). La Convención sobre los Derechos del Niño: significado, alcance y nuevos retos. *Educatio Siglo XXI*, 30(2), 47-68.
- Carillo, F., & Umaña, N. (2017). *La dignidad humana como pilar del Estado social de derecho en Colombia [Tesis de posgrado]*. Villavicencio: Universidad Santo Tomas - Facultad de Derecho.
- Cely, D. (2015). Análisis de los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos. *Salud y Sociedad*, 2(1). Obtenido de https://revistas.uptc.edu.co/index.php/salud_sociedad/article/view/3978

Código de la Infancia y la Adolescencia, Ley N° 1098 (Congreso de Colombia 8 de Noviembre de 2006). Obtenido de <https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2006/4609.pdf>

Comisión Nacional de Derechos Humanos - México. (s.f). *El interés superior de niñas, niños y adolescentes, una consideración primordial*. México: Primera Visitaduría General. Obtenido de https://www.cndh.org.mx/sites/default/files/doc/Programas/Ninez_familia/Material/cuadri_interes_superior_NNA.pdf

Constitución de la República de Grecia (Quinta Cámara de Revisión Constituciona de los Griegos 27 de Mayo de 2008).

Constitución Española (Senado de España 29 de Diciembre de 1978).

Constitución Federal de la Confederación Suiza (Conferedación Suiza 18 de Abril de 1999).

Constitución Política de Colombia (República de Colombia 1991). Obtenido de <https://www.corteconstitucional.gov.co/inicio/Constitucion%20politica%20de%20Colombia.pdf>

Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, Resolución 2106 A (ONU: Asamblea General 21 de Diciembre de 1965). Obtenido de <https://www.ohchr.org/SP/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx>

Convención sobre los Derechos del Niño, Resolución 44/25 (Asamblea General de las Naciones Unidas 20 de Noviembre de 1989). Obtenido de https://www.ohchr.org/Documents/ProfessionalInterest/crc_SP.pdf

De Miguel, I. (2004). Consideraciones sobre el concepto de dignidad humana. *Anuario de filosofía del derecho*(21), 187-212. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=1217052>

Declaración de los Derechos del Niño, Resolución 1386 (ONU: Asamblea General 20 de Noviembre de 1959). Obtenido de <https://www.cidh.oas.org/Ninez/pdf%20files/Declaraci%C3%B3n%20de%20los%20Derechos%20del%20Ni%C3%B1o.pdf>

Declaración Universal de Derechos Humanos (ONU: Asamblea General 10 de Diciembre de 1948).

Declaración Universal sobre el Genoma Humano y los Derechos Humanos (ONU: Asamblea General 11 de Noviembre de 1997). Obtenido de http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13177&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Delgado, J. (2018). Dignidad humana = Human dignity. *Eunomía*(15), 176-197.

Elton, M. (Septiembre de 2015). Experiencia de los principios morales: Kant y Tomás de Aquino. *Veritas*(33), 45-69.

Freites, L. (Septiembre de 2008). La convención internacional sobre los derechos del niño: Apuntes básicos. *Educere*, 12(42), 431-437. Obtenido de http://www.iin.oea.org/Cursos_a_distancia/la_convencion_sobre_los_derechos_del_nino.pdf

- García, A. (2012). Problemas constitucionales de la dignidad humana. *Personas y Derecho*, 62(2), 449-514.
- Gonzáles, E., & León, D. (2013). *Ley de infancia y adolescencia en Colombia. Análisis socio-jurídico [Tesis de Posgrado]*. Bogotá: Universidad Libre - Maestría en Derecho Penal.
- González, A. (2004). La dignidad de la persona, presupuesto de la investigación científica. Concepciones de la dignidad. En J. Ballesteros, & Á. Aparisi, *Biotecnología, dignidad y derecho: bases para un diálogo* (págs. 17-41). Pamplona: Euns.
- González, J. (2007). La dignidad de la persona y el Derecho Administrativo. *A&C Revista de direito administrativo e constitucional*, 11-35.
- González, M. (2013). *Derechos de niñas, niños y adolescentes*. México: Instituto de Investigaciones Jurídicas.
- Gros, H. (2003). La Dignidad Humana en los Instrumentos Internacionales sobre Derechos Humanos. *Anuario de Derechos Humanos. Nueva Época*, 4, 193-223.
- Häberle, P. (2003). Capítulo Quinto. Manifestaciones Particulares. En *El Estado Constitucional* (págs. 161-276). México: Universidad Nacional Autónoma de México . Obtenido de <https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/9/4291/10.pdf>
- Habermas, J. (Mayo de 2010). The Concept of Human Dignity and the Realistic Utopia of Human Rights. *Diánoia*, 55(64), 3-25.
- Hervada, J. (1994). La dignidad y la libertad de los hijos de Dios. *Revista Fidelium Iura*(4), 9-32.

- Jiménez, M., & Domínguez, A. (2001). La educación para la dignidad y el ejercicio de los derechos humanos. *Revista Chilena de Derecho*, 28(2), 401-412. Obtenido de <https://repositorio.uc.cl/bitstream/handle/11534/14908/000334722.pdf?sequence=1>
- Kant, I. (1921). *Fundamentación de la metafísica de las costumbres*. San Juan: Puerto Rico.
- Kant, I. (2010). *Fundamentación de la metafísica de las costumbres (tr. de Manuel García Morente)*. México: Porrúa.
- Lázaro, I. (2011). Protección de la infancia vs. El niño, sujeto de derechos. *Revista Crítica [online]*. Obtenido de <http://www.revista-critica.com/la-revista/monografico/analisis/557-proteccion-de-la-infancia-vs-el-nino-sujeto-de-derechos>
- Ley Fundamental de la República Federal de Alemania (República Federal de Alemania 23 de Mayo de 1949).
- Ley General de Educación, Ley 115 (Congreso de la República de Colombia 8 de Febrero de 1994). Obtenido de https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-85906_archivo_pdf.pdf
- López, R. (2018). Human dignity in Mexico: its essential content from german and spanish jurisprudence. *Boletín mexicano de derecho comparado*, 51(151), 135-173. doi:<http://dx.doi.org/10.22201/ijj.24484873e.2018.151.12292>
- Malpas, J., & Lickiss, N. (2007). Introduction to a Conversation. En J. Malpas, & N. Lickiss, *Perspectives on Human Dignity: A conversation* (págs. 1-5). Netherlands: Springer Science & Business Media.

- Marín, L. (Enero de 2007). La dignidad humana, los derechos humanos y los derechos constitucionales. *Revista de Bioética y Derecho*(9), 1-8.
doi:<https://doi.org/10.1344/rbd2007.9.7833>
- Martínez, J. (2012). La dignidad de la persona humano en Santo Tomás de Aquino. Una lectura moral acerca de la ancianidad. *Intus - Legere Filosofía*, 6(1), 141-158.
- Marzoa, Á. (2000). La "communio" como espacio de los derechos fundamentales. *Fidelium Iura*(10), 147-180.
- Ministerio de Educación Nacional. (2009). *Plan Nacional de Educación en Derechos Humanos*. Colombia. Obtenido de <https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Education/Training/actions-plans/Colombia.pdf>
- Montero, J. (2015). *La dignidad humana en la jurisprudencia constitucional colombiana: Un estudio sobre su evolución conceptual*. Bogotá: Universidad Católica de Colombia - Facultad de Derecho.
- Oehling, A. (2015). *La dignidad de la persona: evolución histórico filosófica, concepto, recepción constitucional y relación con los valores y derechos fundamentales [Tesis doctoral]*. Madrid: Universidad Complutense de Madrid - Facultad de Derecho. Obtenido de <https://eprints.ucm.es/54520/1/5328086519.pdf>
- Olivares, H. (2018). *Dignidad Humana: un análisis discursivo y jurídico del concepto a partir de su función teórica y práctica en Colombia [Tesis de posgrado]*. Bogotá: Universidad Libre - Facultad de Filosofía.

Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Resolución 2200 A (ONU:

Asamblea General 16 de Diciembre de 1966). Obtenido de
<https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/cescr.aspx>

Pele, A. (Junio de 2003). Una aproximación al concepto de dignidad humana. *Universitas*, 9-13.

Obtenido de
https://www.researchgate.net/publication/44443519_Una_aproximacion_al_concepto_de_dignidad_humana

Pérez, C., & Butanda, M. (Mayo de 2015). *Existencia, esencia y dignidad del ser humano*.

Obtenido de Repositorio de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo:
https://repository.uaeh.edu.mx/bitstream/bitstream/handle/123456789/16867/youblisher.com-1136808-Existencia_esencia_y_dignidad_del_ser_humano.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Peritone, P., & Cuminsky, R. (1986). Feudalismo: crítica de un modelo de sociedad y economía política. *Revista Mexicana de Sociología*, 48(1), 5-25. doi:10.2307/3540406

Recomendación sobre la Educación para la Comprensión, la Cooperación y la Paz Internacionales y la Educación relativa a los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales (UNESCO 19 de Noviembre de 1974). Obtenido de http://portal.unesco.org/es/ev.php-URL_ID=13088&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

Rodríguez, G. (2007). Introducción a la psicología jurídica. En G. C. Rodríguez, *Bases psicológicas del comportamiento jurídico en México* (págs. 1-43). México: Facultad de Psicología - UNAM.

Ruíz, A. (2006). Artículo 10: derechos fundamentales de la persona. En Ó. Alzaga, *Comentarios a la Constitución Española. Tomo II - Artículos 10 a 23 de la Constitución Española de 1978* (págs. 37-108). Madrid: Edesa.

Sánchez, N. (2015). Ernst Cassirer, Rousseau, Kant, Goethe. Filosofía y cultura en la Europa del Siglo de las Luces. *Diánoia*, 60(75), 171-175. Obtenido de <http://www.scielo.org.mx/pdf/dianoia/v60n75/0185-2450-dianoia-60-75-00171.pdf>

Sentencia C- 239 (Corte Constitucional de la República de Colombia 1997). Obtenido de <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1997/c-239-97.htm>

Sentencia C-113 (Corte Constitucional de la República de Colombia 2017). Obtenido de <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2017/C-113-17.htm>

Sentencia C-221 (Corte Constitucional de la República de Colombia 1994). Obtenido de <https://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/1994/C-221-94.htm>

Sentencia C-355 (Corte Constitucional de la República de Colombia 2006). Obtenido de <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/c-355-06.htm>

Sentencia C-542 (Corte Constitucional de la República de Colombia 1993). Obtenido de <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/c-542-93.htm>

Sentencia No. C-224 (Corte Constitucional de la República de Colombia 1994). Obtenido de <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1994/C-224-94.htm>

Sentencia No. T-499 (Corte Constitucional de la República de Colombia 1992). Obtenido de <https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1992/T-499-92.htm>

Sentencia No. T-571 (Corte Constitucional de la República de Colombia 1992).

Sentencia T-260 (Corte Constitucional de la República de Colombia 2012). Obtenido de
<https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2012/T-260-12.HTM>

Sentencia T-381 (Corte Constitucional de la República de Colombia 2014). Obtenido de
<https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2014/t-381-14.htm>

Sentencia T-881 (Corte Constitucional de la República de Colombia 2002). Obtenido de
<https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2002/T-881-02.htm>

Trueba, C. (Febrero de 2016). *Algunos antecedes de la noción de dignidad humana en la poesía y filosofía griegas*. Obtenido de Asociación mexicana de estudios clásicos A.C :
https://asociamecdotmx.files.wordpress.com/2016/02/ii_01_trueba_dignidad.pdf

Ugarte, J. (1995). El sistema jurídico de Kelsen, síntesis y crítica. *Revista Chilena de Derecho*, 22(1), 109-118.

UNICEF. (2001). *Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño Observaciones Generales del Comité de los Derechos del Niño*. México: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. Obtenido de <https://www.unicef.org/UNICEF-ObservacionesGeneralesDelComiteDeLosDerechosDelNino-WEB.pdf>

UNICEF. (2006). *Convención sobre los derechos del niño*. Madrid: Nuevo siglo. Obtenido de
<https://www.un.org/es/events/childrenday/pdf/derechos.pdf>

Valls, R. (2005). El concepto de dignidad humana. *Revista de Bioética y Derecho [online]*.

Obtenido de <http://www.bioeticayderecho.ub.edu/es/valls-r-el-concepto-de-dignidad-humana-revista-de-bioetica-y-derecho>

Varsi, E. (2017). Clasificación del sujeto de derecho frente al avance de la genómica y la procreática. *Acta bioethica*, 23(2), 213-225.

Velasco, Y. (2013). La dignidad humana como valor, principio y derecho en la jurisprudencia constitucional colombiana. *Criterios*, 6(2), 81-130.
doi:<https://doi.org/10.21500/20115733.2006>